



PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, Viernes 03 de Septiembre de 2021
Año CII Edición No. 71

CONTENIDO

PODER EJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 839 POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO NÚMERO 499.....	2
DECRETO NÚMERO 843 POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO NÚMERO 499.....	19
DECRETO NÚMERO 845 POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 13 BIS DE LA LEY NÚMERO 468 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE GUERRERO.....	64

PODER EJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 839 POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO NÚMERO 499.

HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a sus habitantes, sabed,

Que el H. Congreso Local, se ha servido comunicarme que,

LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, Y:

C O N S I D E R A N D O

Que en sesión de fecha 13 de julio del 2021, la Diputada y los Diputados integrantes de la Comisión de Justicia, presentaron a la Plenaria el Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 499, en los siguientes términos:

"MÉTODO DE TRABAJO

Esta Comisión de Justicia, desarrollo los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe, establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231.

I.- En el apartado denominado de antecedentes se indica la fecha de presentación ante el pleno de este Honorable Congreso del Estado de Guerrero y del recibo del turno para su análisis y dictaminación.

II.- En el apartado denominado contenido de las iniciativas se resume los objetivos de estas.

III.- En el apartado consideraciones, la y los integrantes de esta comisión dictaminadora expresaron los razonamientos y argumentos con los cuales se sustenta el presente dictamen.

ANTECEDENTES GENERALES

Que para efectos de la emisión de este dictamen y por acumulación de la materia atender, se abordan aquí las iniciativas presentadas por los proponentes, según el ordinal de artículo, más bajo, aún que en la misma propuesta se encuentre otro ordinal más alto en grado numérico. Esto para efecto de establecer el rigor lógico y jurídico en la exposición de las propuestas, pues todos los planteamientos a analizar son de materia penal desahogándose en este dictamen. Asimismo, a partir de aquí se conocerán estas por el número que las ubica y describe con su propuesta.

1 En sesión celebrada el día 11 de marzo de 2021 el pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, tomo conocimiento de proyecto de adición que adiciona el artículo 135 del Código Penal del Estado número 499. Presentada por la Diputada Marina Itallitzin García Guillen del Partido Morena de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, turno dicha iniciativa a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente.

Que fue recibida formalmente dicha iniciativa, en el mes de marzo del año 2021

2 En sesión celebrada el día 24 de febrero del año 2021 el pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, tomo conocimiento de proyecto de adición que reforma el artículo 204 Bis del Código Penal del Estado Número 499. Presentada por el Diputado Marco Antonio Cabada Arias del Partido Morena de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, turno dicha iniciativa a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente.

Que fue recibida formalmente dicha iniciativa, en el mes de febrero del año 2021.

3 En sesión celebrada el día el día 24 de febrero del año 2021 la Comisión Permanente de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero tomo conocimiento de proyecto

de iniciativa que adiciona a el artículo 274 fracción X del Código Penal del Estado de Guerrero Número 499 presentada por el Diputado Moisés Reyes Sandoval del Partido Morena.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, turno dicha iniciativa a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente el día 26 del mes febrero año 2021.

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS

1- La iniciativa número -1-, presentada por la Diputada Mariana Itallitzin García Guillen manifiesta que el objetivo de la iniciativa es, "establecer un tipo penal que establezca la previsión de sanciones para los servidores públicos que filtren imágenes, archivos o información de una carpeta de investigación en trámite, máxime cuando se lesione la dignidad o memoria de las víctimas directas o indirectas de un delito y sea cometida por un servidor público de una institución de seguridad."

2- La iniciativa número -2-, presentada por el Diputado Marco Antonio Cabada Arias manifiesta que el objetivo de la iniciativa es sancionar a los padres del niño agresor quienes tendrán la obligación de llevar al hijo o hija a terapia psicológica estableciendo, asimismo imponiendo multa cuando exista en las instituciones educativas públicas y privadas de nivel básico, algún tipo de discriminación en razón de religión, género, vestimenta, discapacidad física e intelectual, condición social o económica, lugar de origen, estado de salud y también exista agresión física o verbal, de manera reiterativa por parte de un alumno a sus demás compañeros".

3- La iniciativa número -3-, presentada por el Diputado Moisés Reyes Sandoval "pretende establecer como conducta típica, antijurídica, culpable y punible, ampliando el tipo penal de abuso de autoridad con nueva fracción X. A aquel que servidor público, que beneficiándose de su posición o en el ejercicio de sus funciones, se aplique o haga aplicar para sí o para una tercera persona una vacuna destinada a una acción ordinaria o extraordinaria de inmunización, ignorando los criterios de la estrategia de vacunación definida por la autoridad duplicando en su caso el castigo punitivo cuando exista emergencia sanitaria"

CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN

PRIMERA.- Esta Comisión de Justicia que una vez recibido el turno de las iniciativas, tuvo a bien estudiar las propuestas,

en su contenido y al respecto, estas se desahogaron en el resolutivo respectivo, conforme se enumeraron en este dictamen.

Respecto a la primera iniciativa, formulada por la Diputada Mariana Itallizin García Guillen en la que propone adición al artículo 135 del Código Penal en análisis propone en su exposición de motivos "La violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. El feminicidio se entiende como la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el estado y sus agentes, por acción u omisión. en los últimos años los feminicidios no han parado, por el contrario, han ido en aumento con cifras alarmantes que no sólo impactan a las familias de las víctimas directas. de manera indirecta estos hechos de violencia extrema han traído consigo graves consecuencias para la sociedad en general, en virtud de ser una manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder entre hombres y mujeres. es necesario mencionar que la variación entre las cifras de víctimas de feminicidios y las víctimas mujeres de homicidios dolosos se puede deber a que en la mayoría de las ocasiones las muertes por razones de género son calificadas y juzgadas como homicidios intencionales o dolosos por las autoridades judiciales, esto debido a la falta de capacitación, dificultades probatorias e inconsistencias en las carpetas de investigación, incompetencia o inactividad e indiferencia de las autoridades responsables de proteger a las mujeres para llevar a cabo sus diligencias con perspectiva de género y tipificar la conducta de forma adecuada. en todo el país existen miles de casos de mujeres que han muerto de manera violenta que destacan por la gran impunidad en la administración y procuración de justicia, lo que ha provocado la indignación y conmoción de la sociedad en general .por si fuera poco, por errores obvios de la policía; porque no cuidaron la evidencia o ni siquiera la buscaron. la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia establece que corresponde a las entidades federativas especializar a las y los agentes del ministerio público, peritos, personal que atiende a víctimas a través de programas y cursos permanentes en derechos humanos y género; perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de carpetas de investigación y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y feminicidio; e

incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales; eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, entre otros. Sin embargo, es posible advertir que dicho precepto no se materializa en la realidad, pues constantemente las mujeres son revictimizadas por las propias instituciones encargadas de procurar e impartir justicia. Pareciera que el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia en la mayoría de los casos impera la impunidad y la corrupción, pues están asentadas en las instituciones mismas en un trato autoritario y discriminatorio y en muchas ocasiones violentos de funcionarias y funcionarios, así como de las autoridades, contra la ciudadanía. el trato a las mujeres en infinidad de casos es doblemente discriminatorio y además violento, al grado de constituir violencia institucional. la ausencia de protocolos de actuación con perspectiva de género actualizados para los casos de muerte violentas de mujeres, así como su indebida implementación, han provocado que los funcionarios públicos encargados de la procuración de justicia actúen sin perspectiva de derechos humanos y de género, lo que ha contribuido a la realización de prácticas de revictimización de las y los familiares de las víctimas, incluyendo fenómenos de revictimización hacia la propia víctima de feminicidio. es innegable que los avances tecnológicos han favorecido la actuación de las autoridades encargadas de las investigaciones criminales en la recolección, identificación, estudio y análisis de los indicios que son encontrados en la escena del crimen. sin embargo, también han jugado un papel importante en la violencia de género contra las mujeres. existen múltiples casos donde las propias personas servidoras públicas han filtrado, de manera amarillista, las imágenes, documentos, videos o audios obtenidos en cumplimiento de su labor relacionados con hechos constitutivos de delitos, que transgreden la dignidad de las mujeres y las revictimizan al exponer y difundir en medios de comunicación imágenes explícitas de sus cuerpos violentados. un caso representativo de violencia contra las mujeres que causó indignación a nivel nacional, fue en nuestro estado de Guerrero, en julio de 2019, cuando una famosa tarotista fue víctima del delito de feminicidio y por si fuera poco, servidores públicos dependientes de la fiscalía general del estado, filtraron imágenes y videos del cadáver de dicha mujer en redes sociales, sin duda fue un hecho muy polémico ya que se señaló como probables responsables a trabajadores de la coordinación de servicios periciales de la fiscalía general del estado (FGE) y la policía ministerial. Ciertamente, el 4 de julio del 2019, presentaron por escrito la denuncia correspondiente ante la FGE, donde ya habrían iniciado según se informó, la carpeta de investigación. tras este procedimiento, la secretaria de salud informó que: "de los informes rendidos por el personal del

servicio médico forense, se pudo apreciar que una vez que el cuerpo fue ingresado a las instalaciones del servicio en Chilpancingo, el cuerpo no tuvo la intervención del personal de salud, sino de la coordinación de servicios periciales de la fiscalía y la policía ministerial". En otras palabras, deslindó al personal de salud, mientras que la fiscalía general del estado no pudo hacer lo mismo; sin embargo, ambas dependencias manifestaron su voluntad de colaborar para deslindar responsabilidades y hasta la fecha nunca hubo sancionados, pues no hay tipo penal que se encuadre dicho supuesto. Por ello, la presente iniciativa de decreto busca establecer un tipo penal que establezca la previsión de sanciones para los servidores públicos que filtren imágenes, archivos o información de una carpeta de investigación en trámite, máxime cuando se lesione la dignidad o memoria de las víctimas directas o indirectas de un delito y sea cometida por un servidor público de una institución de seguridad. la presente propuesta busca sancionar al servidor público que en cualquier etapa del procedimiento difunda a través de cualquier medio imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con un procedimiento penal. También se señala incluye que las penas se incrementarán hasta en una mitad, cuando este sea cometido por persona servidora pública integrante de alguna institución policial. en este sentido, siendo un deber de máxima ética de los servidores públicos para desempeñar su función pública con honradez, buscando respetar en todo momento el derecho humano del gobernado a la buena administración, toda vez que es moralmente imputable y socialmente dañino que una persona facultada para procurar justicia sea quien revele o exhiba actos de violencia mediante imágenes o videos, ya que con ello se afecta la dignidad de las personas, mismos que implican el respeto al recuerdo e imagen de las personas. Aunado a lo anterior, la corte interamericana de derechos humanos, ha reiterado en diversas ocasiones que los servidores públicos encargados de la procuración y administración de justicia, tienen prohibido fotografiar o video grabar el cuerpo de la víctima, salvo para efectos periciales o de investigación y deberá tomar las medidas necesarias para evitar en la medida de sus posibilidades y en atención de las circunstancias existentes que terceras personas lo hagan. En ese tenor, y atendiendo las recomendaciones de la corte interamericana de derechos humanos, en la presente iniciativa se propone reformar el cuarto párrafo del artículo 135 del código penal para el estado libre y soberano de guerrero, número 499, con la finalidad de sancionar a los servidores públicos que de forma indebida difundan información, fotografías y documentos relacionados con algún procedimiento penal.".....

Esta comisión considera la procedencia de la propuesta planteada por la iniciante y comparte con la proponente adicionar, en el tipo penal de estudio el planteamiento formulado estableciendo la punibilidad al servidor público que retarde entorpezca u obstruya maliciosamente o por negligencia la procuración de justicia o administración o que promueva por medio de imágenes, audios, videos o documentos, del lugar de los hechos o del hallazgo indicios evidencias objetos instrumentos relacionados con el procedimiento penal imponiéndose penas de tres a ocho años y multa de quinientos a mil quinientos veces el valor de la unidad de medida de actualización. esto por considerar que no se debe revelar información de la indagatoria o investigación relacionada con el caso del posible delito de feminicidio, pues esto puede poner en riesgo el trabajo de la investigación y su secrecía, motivo por el cual se comparte con la legisladora la proposición tal y como fue presentada. así como cuando el deliro se cometa por servidor público deberá duplicarse la pena.

- Respecto a la segunda iniciativa, formulada por el Diputado Marco Antonio Cabada Arias, en la que propone la adición del artículo 204 Bis del Código Penal en estudio en la que propone establecer sanción penal cuando se maltrate la dignidad del alumno o alumna y / o se le discrimine en los supuestos planteados por el proponente estableciendo su argumentación en la exposición de motivos que "la escuela es una entidad que aprende y que necesita aprender de la propia experiencia para poder crecer y mejorar pedagógicamente. Por eso, de manera conjunta el alumnado como el profesorado han de participar en la construcción diaria como miembros de un proyecto educativo global, más allá de la participación en el aula. también es importante una participación amplia e intensa de las familias en simbiosis con el contexto de que forman parte .las instituciones educativas son vitales para el funcionamiento y recreación del aprendizaje de las niñas y niños que acuden los días de labores a obtener un nuevo conocimiento para generar nuevos aprendizajes que ayudan a crecer en su respectiva etapa ya sea, educativa y social por lo que en un aula escolar, es donde se encuentran el mayor tiempo de su día a día, esto lleva a tener en cuenta que se deben desarrollar en un ambiente tranquilo y donde pueden generar ideas y aprendizajes de la mayor manera posible. El bullying o acoso escolar se refiere a un tipo de comportamiento violento e intimidatorio que se ejerce de manera verbal, física o psicológica entre niños y adolescentes durante la etapa escolar. Se trata de una serie de maltratos continuos que son llevados a cabo de manera intencional por uno o varios agresores, con el propósito de agredir, generar inseguridad o entorpecer su desenvolvimiento escolar de la víctima. Actualmente el tema del bullying en las

instituciones educativas de diferentes niveles de educación es un problema que poco a poco ha ido rebasando hasta a los mismos directivos de las escuelas, ya que algunas veces los casos suelen ser extremos en los que se necesita la intervención de las autoridades correspondientes externas a la institución. Con ello se expresan muchas dificultades para que dentro del aula escolar se puede realizar adecuadamente los procesos cognitivos de aprendizaje puesto que cuando existe algún tipo de agresión suele tener interrupciones en la manera de aprender y procesar la información, en algunos casos suele presentarse que los estudiantes ya no quieren asistir al escuela por miedo de sufrir algún tipo de ofensa verbal o agresiones físicas, que a medida de que avanza el miedo por agresor, sube el nivel de daño que llegan a causar creando que la víctima vea la necesidad de cambiar de escuela o ya no quiera volver a visitar su escuela, por el miedo que causa el maltrato por parte de sus agresores, de igual forma es una tarea fundamental de los padre de los hijos agresores para tomar carácter ante estas acciones que hacen sus hijos, por lo que también es importante que ellos lleven a sus hijos al psicólogo. Por lo que deben evitar la pérdida de las oportunidades de terminar. Es responsabilidad de los padres el ayudar a sus hijos a contener todas esas emociones negativas que tienen, y que hacen que afecte a sus compañeros, en algunas ocasiones no solo basta con regañar al niño incluso existe la probabilidad que este acto genere más descontrol al menor por lo que es mejor buscar ayuda por parte de profesionales de la salud mental. es necesario poner ciertas medidas que impulsen a los padres a tomar medidas prontas, con la finalidad de ayudar a sus hijos.”

Al respecto esta colegida comparte con el proponente la motivación de su dicho y considera procedente la formulación planteada en los términos realizados en la adición del artículo 204 Bis del citado Código Penal Número 499. Y solo amplio la descripción del tipo penal de las instalaciones donde se lleve a efecto dicha discriminación.

Asimismo, esta comisión resalta que la Ley 812 para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero es una ley de orden público e interés social, determina y reconoce, entre otras cosas a niñas niños y adolescentes como titulares de derechos y garantiza el pleno goce, respeto, protección y promoción de los derechos humanos que permitan el crecimiento y desarrollo integral pleno a niñas niños y adolescentes guerrerenses. la misma ley enuncia, los principios rectores de protección a estos sujetos sociales entre los cuales se encuentra el interés superior de la niñez, la universalidad, progresividad e integralidad de los derechos de

las niñas y niños, la no discriminación, la inclusión, el derecho a la vida a la supervivencia y el desarrollo, la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades y el acceso a una vida libre de violencia entre otros. En tal sentido la dictaminadora considera procedente la adición de la propuesta planteada por el iniciante, considerando que no se puede permitir que la sociedad democrática que aspira a ser un sociedad plena mente democrática, en esta exista o se fomente, la nefasta cultura de la discriminación y que no se fomenten valores de solidaridad y humanidad entre sus integrantes y mucho más cuando se contempla al universo social de los niños niñas adolescentes. igualmente, la señalada ley determina en su artículo decimo que es deber de la familia, la comunidad a la pertenecen, del estado y en general de todos los integrantes de la sociedad el respeto, el auxilio para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida. En este orden de ideas la comisión considera procedente la adición al código penal de caso.

- Respecto a la tercera iniciativa formulada por el Diputado Moisés Reyes Sandoval, esta comisión comparte con el legislador la formulación de la reforma al adicionar el artículo 274 al código de turno y del supuesto contemplado en el tema referente cuando marca en su exposición de motivos que "... el derecho a la salud es un derecho humano fundamental. de conformidad con el artículo 25 de la declaración universal de los derechos humanos, toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar, incluyendo la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Por su parte, el artículo 12 del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC), reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, independientemente de su condición jurídica o de cualquier otra índole. De esta forma, es claro que el derecho internacional de los derechos humanos garantiza el derecho a la salud de todas las personas, incluidas las personas migrantes, las personas privadas de su libertad y cualquier otra persona que se encuentre en alguna situación de vulnerabilidad. La crisis sanitaria ocasionada por la presencia del virus sars-cov2 en el mundo ha generado una demanda inusitada por las vacunas y fármacos destinados a combatir esta pandemia. Ante el reducido número de vacunas que llegan al país y la urgencia de millones de ciudadanos por ser inmunizados, se han generado grandes incentivos por tener acceso a una dosis de vacuna de forma anticipada. hemos sido testigos en los últimos meses de funcionarios públicos que utilizan su posición de poder y privilegios para ser inmunizados aun cuando las autoridades han expresado claramente que en esta etapa de vacunación únicamente

el personal de salud puede tener acceso a la vacuna .por estas razones, considero que es necesario reformar el código penal del estado para que se castigue a los funcionarios públicos que en beneficio propio o de un tercero, utilice su empleo, cargo o comisión pública, para acceder con prioridad y ventaja a tratamientos médicos, vacunas o insumos médicos .en el estado de Coahuila, ya se han suscitado este tipo de conductas, 29 funcionarios se habrían aplicado la vacuna contra el covid-19. De acuerdo con el periódico milenio, el personal del 12 regimiento de la secretaría de la defensa nacional (SEDENA) que aplicó el antídoto, dio a conocer que, en lugar de sólo administrar las 108 vacunas para el personal médico, se aplicaron 209. Las vacunas adicionales fueron utilizadas para inmunizar a personal externo como el jefe de jurisdicción sanitaria o ingenieros en sistemas del instituto mexicano del seguro social. Otro caso de mucha relevancia fue el de un director de hospital en el municipio de rayón, en el estado México, que se saltó las normas vigentes en el proceso de vacunación y logró que inmunizaran a dos miembros de su familia. a pesar de que este hecho fue condenado y calificado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como "inmoral", es evidente la necesidad de un cambio en la legislación para generar castigos a las personas que decidan actuar de esta forma. Estas acciones inapropiadas se caracterizan por estar fundamentadas en el delito de abuso de autoridad, el cual es definido como la exageración o extralimitación que las autoridades o funcionarios públicos hacen de las facultades que les están concedidas para el desempeño de su cargo u oficio. De esta forma, hemos visto cómo políticos o funcionarios públicos utilizan de sus facultades para acceder de forma ilegal y ventajosa a las vacunas. el hecho de reformar el código penal para adicionar la fracción x al artículo 274 como causante del delito de abuso de autoridad utilizar un empleo, cargo o comisión pública para acceder con prioridad y ventaja a tratamientos médicos, vacunas o insumos médicos, generará un importante precedente en la gravedad que el estado mexicano le da a este delito.

Existen millones de mexicanos que necesitan con urgencia ser inmunizados ante la pandemia del covid-19. Ante la escasez de este fármaco, inevitablemente surgirán incentivos por romper las normas y tratar de acceder a él de forma ventajosa e ilegal. Por esta razón, es necesario reformar el marco legal actual para evitar que esto suceda y la vacuna llegue primero a los mexicanos que más lo necesitan"

Al respecto esta dictaminadora considera que la propuesta presentada por el iniciante es procedente en sus términos y que,

estableciendo la pretensión de castigar el abuso de autoridad, es pertinente pues ante la descripción de la hipótesis formulada no debe permitirse la violación a el principio de igualdad y del acceso al inalienable derecho a la salud, por una acción que lastimé y rompa con este principio contemplado plena y absolutamente en la carta magna. En este orden de ideas la dictaminadora resuelve la procedencia de iniciativa presentada para la adicionar el artículo de caso, considerando que la protección al bien jurídico tutelado contemplado en el tipo penal de abuso de autoridad. También y en uso de la facultades de la dictaminadora para el buen uso del lenguaje se cambió la palabra sanción por pena, por considerar más apropiada en la redacción del supuesto del caso. Así como se añadió a la descripción las palabras que aluden al género masculino como femenino en el caso de los funcionarios públicos, pues ambos pueden en la hipótesis planteada abusar del poder para encuadrarse a la descripción expuesta. Por otro lado, se consideró mantener la descripción actual en la norma, en referencia a la fracción I y II sin añadir las otras a la punición formulada pues con lleva el planeamiento inicial con la reforma final propuesta y por ello se respeta el texto vigente, sin embargo, se aumentó el máximo de la multa, compartiendo con ello la propuesta del incitante. Y se describe por último la hipótesis que anima al motivante describiendo el supuesto de emergencia sanitaria o situación de emergencia para cuando los funcionarios públicos, quieran disponer de su condición de ejercicio de poder abusando de este y violen las disposiciones sanitarias para el acceso a medicamentos o vacunas de uso colectivo y de ejercicio al derecho a la salud.

TERCERA. - Para facilitar la comprensión de la propuesta presentada y su mejor entendimiento, esta comisión, exhibe gráficamente el cuadro comparativo, entre el texto vigente y las propuestas de modificación correspondiente.

CÓDIGO PENAL NÚMERO 499 TEXTO VIGENTE	CÓDIGO PENAL NÚMERO 499 PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN.
ARTÍCULO 135. ...	ARTÍCULO 135. ...
...	...
...	...
De la I a la VII...	De la I a la VII...
...	...

<p>...</p> <p>AL SERVIDOR PÚBLICO QUE RETARDE, ENTORPEZCA O POR NEGLIGENCIA LA PROCURACIÓN O ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SE LE IMPONDRÁ PENA DE PRISIÓN DE TRES A OCHO AÑOS Y MULTA DE QUINIENTAS A MIL VECES EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN ADEMÁS DE SER DESTITUIDO E INHABILITADO DE TRES A DIEZ AÑOS PARA EL DESEMPEÑO DE OTRO EMPLEO, CARGO O COMISIÓN.</p> <p>PÁRRAFO SEXTO NO EXISTE</p> <p>ARTÍCULO 204. BIS I NO EXISTE</p> <p>ARTÍCULO 269</p> <p>De la I a la VI ...</p>	<p>...</p> <p><i>Al servidor público que retarde, entorpezca u obstruya maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia en cualquier etapa del procedimiento o difunda a través de cualquier medio imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal, se le impondrán pena de prisión de tres a ocho años y multa de quinientos a mil quinientos veces el valor de la unidad de medida y actualización, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.</i></p> <p><i>Quando el delito sea cometido por persona integrante de alguna institución policial, las penas previstas en este artículo se incrementarán hasta en una mitad.</i></p> <p>ARTÍCULO 204 BIS I. DISCRIMINACIÓN EN INSTALACIONES ESCOLARES PÚBLICAS O PRIVADAS.</p> <p><i>Quando exista en las instituciones educativas públicas y privadas de nivel básico, algún tipo de discriminación por razón de religión, género, vestimenta, discapacidad física e intelectual, condición social o económica, lugar de origen, estado de salud, existencia de agresión física o verbal, de manera reiterativa por parte de un alumno o sus demás compañeros, los padres del agresor tendrán la obligación de llevar a su hijo a terapia psicológica, y el mismo serán acreedores a multa</i></p>
--	---

<p>FRACCIÓN VII NO EXISTE.</p>	<p><i>cient unidades de medida actualización vigente al momento de comisión de esta conducta.</i></p>
<p>...</p>	<p>ARTÍCULO 269 ...</p>
<p>...</p>	<p>...</p>
<p>...</p>	<p>De la I a la VI ...</p>
<p>ARTÍCULO 274</p>	<p><i>VII- Quien difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videografe, audiografe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, documentos, audios o videos del lugar de los hechos del hallazgo; indicios, evidencias, objetos de cadáveres o parte de ellos.</i></p>
<p>...</p>	<p>...</p>
<p>De la I a la IX ...</p>	<p>...</p>
<p>FRACCIÓN X. NO EXISTE</p>	<p>...</p>
<p>...</p>	<p>...</p>
<p>...</p>	<p>ARTÍCULO 274 ...</p>
<p>...</p>	<p>...</p>
<p>...</p>	<p>De la I a la IX ...</p>
<p>PÁRRAFO CUARTO NO EXISTE</p>	<p><i>X. A el servidor público, que realice en periodo de emergencia sanitaria o de pandemia la aplicación para sí o para una tercera persona una vacuna destinada para una acción extraordinaria de inmunización, contraviniendo los criterios de la estrategia de vacunación definida por las autoridades sanitarias; se le impondrá de dos a nueve años de prisión y multa de setenta hasta ciento cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización”</i></p>
<p>...</p>	<p>...</p>
<p>...</p>	<p>...</p>
<p>...</p>	<p>...</p>
<p>...</p>	<p>...</p>

	<p>...</p> <p><i>Al que cometa este delito en los términos previstos de la fracción X, se duplicará la pena cuando la conducta se realice, en su caso cuando se presente el periodo de emergencia sanitaria”</i></p>
--	---

CUARTA. - Que esta dictaminadora, no encontró presunción y elementos que pudieran contravenir a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, o contradicción con normas de carácter general en las propuestas atendidas. Fue así que en esta reforma y adición al Código Penal vigente del Estado Libre y Soberano Número 499, se incorporan los siguientes tipos y penalidades que los acompañan, con la descripción hipotética que se presentaron por parte de los legisladores”.

Que en sesiones de fecha 13 de julio del 2021, el Dictamen en desahogo recibió primera y dispensa de la segunda lectura, por lo que en términos de lo establecido en los artículos 262, 264 y 265 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, la Presidencia de la Mesa Directiva, habiendo sido expuestos los motivos y el contenido del Dictamen, al no existir votos particulares en el mismo y no habiéndose registrado diputados en contra en la discusión, se preguntó a la Plenaria si existían reserva de artículos, y no habiéndose registrado reserva de artículos, se sometió el dictamen en lo general y en lo particular, aprobándose el dictamen por unanimidad de votos.

Que aprobado en lo general y en lo particular el Dictamen, la Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado realizó la Declaratoria siguiente: “Esta Presidencia en términos de nuestra Ley Orgánica, tiene por aprobado el Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 499. Emítase el Decreto correspondiente y remítase a las Autoridades competentes para los efectos legales conducentes”.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 fracción I de la Constitución Política Local, 227 y 287 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, este Honorable Congreso decreta y expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 839 POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO NÚMERO 499.

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el **último** párrafo del artículo 135 y las fracciones VIII y IX del artículo 274 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, Número 499, para quedar como sigue:

Artículo 135. ...

...

...

De la I a la VII...

...

...

Al servidor público que retarde, entorpezca **u obstruya** maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia **en cualquier etapa del procedimiento o difunda a través de cualquier medio imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal**, se le impondrán pena de prisión de tres a ocho años y multa de quinientos a mil quinientos veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Artículo 274. ...

...

De la I a la VII

VIII. Omita el registro de la detención correspondiente o dilate injustificadamente poner al detenido a disposición de la autoridad correspondiente;

IX. Incumpla la obligación de impedir la ejecución de las conductas de privación ilegal de la libertad, **y**

...

...

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan un párrafo **final al** artículo 135; el artículo 204 Bis I; la fracción X y un párrafo **final al** artículo 274 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, Número 499, para quedar como sigue:

Artículo 135. ...

...

...

De la I a la VII...

...

...

...

Quando el delito sea cometido por persona integrante de alguna institución policial, las penas previstas en este artículo se incrementarán hasta en una mitad.

Artículo 204 Bis I. Discriminación en instalaciones escolares públicas o privadas.

Quando exista en las instituciones educativas públicas y privadas de nivel básico, algún tipo de discriminación en razón de religión, género, vestimenta, discapacidad física e intelectual, condición social o económica, lugar de origen, estado de salud, exista agresión física o verbal, de manera reiterativa por parte de una alumna o alumno a sus demás compañeros o compañeras, los padres y las madres del agresor o de la agresora tendrán la obligación de llevar a su hija o hijo a terapia psicológica, así mismo serán acreedores a multa de cien unidades de medida y actualización vigente al momento de la comisión de esta conducta.

Artículo 274. ...

...

De la I a la IX. ...

X. A la servidora o servidor público, que realice en periodo de emergencia sanitaria o de pandemia la aplicación para sí o para una tercera persona una vacuna destinada para una acción extraordinaria de inmunización, contraviniendo los criterios de la estrategia de vacunación definida por

las autoridades sanitarias; se le impondrá de dos a nueve años de prisión y multa de setenta hasta ciento cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.

...

...

Al que cometa este delito en los términos previstos de la fracción X, se duplicará la pena cuando la conducta se realice, en su caso cuando se presente el periodo de emergencia sanitaria.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.

SEGUNDO.- Remítase al titular del Poder Ejecutivo para su conocimiento y para los efectos legales conducentes.

TERCERA.- Colóquese y publíquese en la página de la Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado de Guerrero, así como en las diferentes redes sociales del mismo, para su mayor difusión y conocimiento.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los trece días del mes de julio del año dos mil veintiuno.

DIPUTADA PRESIDENTA.
EUNICE MONZÓN GARCÍA.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
CELESTE MORA EGUILUZ.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
DIMNA GUADALUPE SALGADO APÁTIGA.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 90 numeral 1 y 91 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, promulgo y ordeno la publicación, para su

debida observancia, del **DECRETO NÚMERO 839 POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO NÚMERO 499**, en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veinticinco días del mes de agosto del año dos mil veintiuno.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO.

LIC. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES.

Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.

LIC. FLORENCIO SALAZAR ADAME.

Rúbrica.

DECRETO NÚMERO 843 POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO NÚMERO 499.

HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a sus habitantes, sabed,

Que el H. Congreso Local, se ha servido comunicarme que,

LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, Y:

C O N S I D E R A N D O

Que en sesión de fecha 04 de agosto del 2021, la Diputada y los Diputados integrantes de la Comisión de Justicia, presentaron a la Plenaria el Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 499, en los siguientes términos:

"MÉTODO DE TRABAJO

Esta COMISIÓN DE JUSTICIA, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación

se describe, establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero número 231.

I.- En el apartado denominado de ANTECEDENTES se indica la fecha de presentación ante el Pleno de este Honorable Congreso del Estado de Guerrero y del recibo del turno para su análisis y dictaminación.

II.- En el apartado denominado CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS se resume los objetivos de estas.

III.- En el apartado CONSIDERACIONES, la y los integrantes de esta COMISIÓN DICTAMINADORA expresaron los razonamientos y argumentos con los cuales se sustenta el presente Dictamen.

ANTECEDENTES GENERALES

Que para efectos de la emisión de este Dictamen, se anotan aquí las iniciativas presentadas por las y los proponentes, según el ordinal de artículo, más bajo, aún que en la misma propuesta se encuentre otro ordinal a reformar, más alto en grado numérico. Esto para efecto de establecer el rigor lógico y jurídico en la exposición de las propuestas, pues todos los planteamientos a analizar son de la materia Penal desahogándose en este Dictamen. Asimismo a partir de aquí se conocerán estas por el número que las ubica y describe con su propuesta.

1- En sesión celebrada el día 29 de octubre de 2019 el Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, tomó conocimiento del proyecto de adición que reforma dos párrafos del artículo 169 Bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 499, Presentada por la Diputada MARIANA ITALLITZIN GARCÍA GUILLÉN del Partido MORENA de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, turnó dicha iniciativa a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente.

Que fue recibida formalmente dicha iniciativa, el día 31 de octubre de 2019.

2- En sesión celebrada el día 05 de febrero de 2020 el Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero tomó conocimiento de proyecto de adición que reforma el artículo 171 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano

de Guerrero, número 499 presentada por el Diputado MARCO ANTONIO CABADA ARIAS del Partido MORENA de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, turnó dicha iniciativa a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente.

Que fue recibida formalmente dicha iniciativa, el día 07 de febrero del año 2020.

3- En sesión celebrada el día 21 de noviembre de 2019 el pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, tomó conocimiento del proyecto de adición que reforma en materia de combate a la discriminación, por el que se reforma el artículo 204 Bis del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 499. Presentada por el Diputado MARCO ANTONIO CABADA ARIAS del partido de MORENA de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, turnó dicha iniciativa a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente.

Que fue recibida formalmente dicha iniciativa, el día 22 DE noviembre de 2019.

4- En sesión celebrada el día 09 de diciembre de 2019, el Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, tomó conocimiento de proyecto de adición que reforma el artículo 205 Bis, del Código Penal del Estado número 499. Presentada por la Diputada MARIANA ITALLITZIN GARCÍA GUILLEN del Partido MORENA, de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, turnó dicha iniciativa a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente.

Que fue recibida formalmente dicha iniciativa, el día 10 de diciembre del año 2019.

5- En sesión celebrada el día 15 de octubre de 2019 el Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, tomó conocimiento de proyecto de adición que reforman

los artículos 210, 211 y 212 del Código Penal del Estado de Guerrero, número 499. Presentada por las Diputadas NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MARIANA ITALLITZIN GARCÍA GUILLÉN, BLANCA CELENE ARMENTA PIZA, NILSAN HILARIO MENDOZA y el Diputado LUIS ENRIQUE RÍOS SAUCEDO del Partido MORENA de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, turnó dicha iniciativa a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente.

Que fue recibida formalmente dicha iniciativa, el día 18 de octubre del año 2019.

6- En sesión celebrada el día 19 de septiembre de 2019, el Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, tomó conocimiento del proyecto que reforma y adiciona Capítulo III y el artículo 220 Bis relacionado con Desplazamiento Forzoso, del Código Penal del Estado número 499. Presentada por la Diputada MARIANA ITALLITZIN GARCÍA GUILLÉN del Partido MORENA de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, turnó dicha iniciativa a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente.

Que fue recibida formalmente dicha iniciativa, el día 24 de septiembre de 2019.

7- En sesión celebrada el día 03 de octubre de 2019, el Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, tomó conocimiento de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforman los artículos 232 Y 232 Bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 499. Presentada por el Diputado HÉCTOR OCAMPO ARCOS del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, turnó dicha propuesta a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente.

Que fue recibida formalmente, el día 04 de octubre del año 2019.

8- En sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2019, el Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, tomó conocimiento de la incitativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma el artículo 237 con último párrafo del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 499. Presentada por la Diputada LETICIA MOSSO HERNÁNDEZ del PARTIDO DEL TRABAJO de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, turnó dicha propuesta a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente.

Que fue recibida formalmente, el día 11 de octubre del año 2019.

9- En sesión celebrada el día 10 de octubre de 2019 el Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, tomó conocimiento de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma los artículos 364 y la fracción I del artículo 365 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 499. Presentada por la Diputada EUNICE MONZÓN GARCÍA y el Diputado MANUEL QUIÑONEZ CORTÉS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, turnó dicha propuesta a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente.

Que fue recibida formalmente, el día 27 de septiembre del año 2019.

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS

1- La iniciativa número-1-, Presentada por la Diputada MARIANA ITALLIZIN GARCÍA GUILLÉN del partido MORENA "tiene como finalidad proteger el bienestar y la integridad física tanto de las mujeres que se encuentran embarazadas, y que son víctimas de abandono por parte del padre de sus hijos, así como al ser humano que se encuentra en gestación, sancionando de manera pecuniaria o corporal para el caso en el que la persona con quien la mujer ha concebido, se niegue injustificadamente a proporcionar alimentos, pudiéndose agravar dicha sanción cuando derivado del abandono de la mujer embarazada, resultare con alguna lesión, o se haya puesto en riesgo la salud o la integridad de ésta o la del producto en concepción en cualquier

momento del embarazo. Así mismo, cuando derivado del abandono de la persona con quien ha concebido, se produzca la muerte de la mujer gestante o la muerte del producto en concepción en cualquier momento del embarazo. Por lo que se propone adicionar el artículo 169 Bis, en el cual se impondrá de seis meses a tres años de prisión y multa de ciento cincuenta a quinientas veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización, así como la privación de derechos familiares, a quien, abandone a una mujer a la que sabe ha embarazado.”

2- La iniciativa número -2- Presentada por el Diputado MARCO ANTONIO CABADA ARIAS del partido MORENA tiene como objetivo el de ampliar el supuesto de la realización de la práctica de la Mendicidad, cuando se “Obligue o Someta “a una persona a ejercer esta actividad contemplada en el Código Penal en el Capítulo que aborda la Corrupción de Menores de edad o de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho. El proponente argumenta que existen delincuentes que obligan a los pasivos a ejecutar esta actividad.

3- La iniciativa número -3- Presentada por el Diputado MARCO ANTONIO CABADA ARIAS, del partido MORENA tiene como objetivo establecer la punibilidad respecto a la discriminación social provocada por el uso del lenguaje y por modificaciones corporales aumentando estos supuestos en el artículo 204 del Código Penal del Estado de Guerrero.

4- La iniciativa número -4- Presentada por la Diputada MARIANA ITALLIZIN GARCÍA GUILLÉN del partido MORENA plantea establecer el delito de fraude familiar, añadiendo el artículo 205 Bis al Código Penal, basándose en el principio del fraude genérico que establece el engaño a otro, aprovechándose del error en que éste se encuentre; de esta manera, uno de los cónyuges evidentemente está engañando al otro, aprovechándose del error que le provocó para ocultar los bienes del matrimonio. Evitando se argumenta que se eviten transferencias o compras a nombre de terceras personas luego de que una vez que concluye un proceso de divorcio y no se distribuye el patrimonio respectivo.

5- La iniciativa número -5- Presentada por las Diputadas Norma OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MARIANA ITALLIZIN GARCÍA GUILLÉN, BLANCA CELENE ARMENTA PIZA, NILSAN HILARIO MENDOZA y EL diputado, LUIS ENRIQUE RÍOS SAUCEDO del partido MORENA. Que establece como objetivo el de aumentar “las penas por sustracción de menores de ocho a veinticuatro años y de ochenta a doscientos cuarenta días de multa; por sustracción de menores por algunos de sus progenitores se le impondrá prisión de seis a doce años y de cuarenta a ciento veinte días multa; Por robo

de infante al que entregue o reciba un infante menor de siete años de edad, sin consentimiento de quien legalmente dependa, con el propósito de obtener un beneficio económico, se le aplicará prisión de nueve a dieciocho años y de seiscientos a mil quinientos días multa. Cuando el delito lo cometa un familiar del infante, que ejerciendo o no la custodia legal se le impondrá de ocho a dieciséis años de prisión y de seiscientos a mil doscientos días multa" esta reforma atiende los artículos 210, 211, y 212 del Código Penal atendido.

6- La iniciativa número -6- Presentada por la Diputada MARIANA ITALLIZIN GARCÍA GUILLÉN del partido MORENA, tiene por objetivo establecer en el Código Penal, el delito de desplazamiento interno forzado tipificando su conceptualización y definiendo la punibilidad del mismo creando el Capítulo III, referente a este nuevo tipo penal.

7- La iniciativa número -7- Presentada por el Diputado HÉCTOR OCAMPO ARCOS del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL tiene como objetivo actualizar, perfeccionar y hacer efectivo el tipo penal del robo de ganado y haciéndolo congruente con la realidad que se vive en Guerrero, ante la necesidad de responder al aumento de la criminalidad, particularmente en el sector de la ganadería; Delito que lesiona económicamente, tanto a los ganaderos como a la sociedad misma, perturbando la tranquilidad de las comunidades rurales.

8-La iniciativa número -8- Presentada por la Diputada LETICIA MOSSO HERNÁNDEZ, integrante del PARTIDO DEL TRABAJO "Pretende endurecer las penas en situaciones específicas, como es el caso de personas originarias de pueblos y comunidades indígenas, de los cuales en su mayoría desconocen cualquier información relacionada a la operación de instituciones financieras, aunado a que en la mayoría de los casos, las personas no hablan el español, lo que facilita a los defraudadores cometer dicho ilícito. Pretende aumentar la pena a quien defraude a personas indígenas, de escasos recursos, y que no hablen completamente el español, acción que por demás facilita sean defraudados". Adicionando el artículo 237.

9- La iniciativa número -9- La iniciativa presentada por la Diputada EUNICE MONZÓN GARCÍA y por el Diputado MANUEL QUIÑONEZ CORTÉS integrantes del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. Tiene como objetivo, que la autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, podrá reducir las penas correspondientes para los delitos por daño ambiental hasta la mitad, cuando el imputado o procesado, repare o compense voluntariamente el daño al ambiente antes de que tal obligación le haya sido impuesta por resolución

administrativa o sentencia judicial. Dicha disminución procederá también, cuando se realice o garantice la reparación o compensación del daño en términos de lo dispuesto por la Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de Guerrero. Así como el establecimiento de la reparación del daño, a la realización de acciones necesarias para restablecer las condiciones ecológicas a un estado anterior, a la realización del hecho ilícito, y en su caso, la compensación del daño al Medio Ambiente así como, el pago de las correspondientes indemnizaciones por los daños que se ocasionen a la salud y a la integridad de las personas como los daños y perjuicios que se deriven de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de Guerrero.

CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN

PRIMERA.- Esta COMISIÓN DE JUSTICIA que una vez recibido el turno de las iniciativas, tuvo a bien estudiar las propuestas, en su contenido y al respecto, estas se desahogaron en el resolutivo respectivo, conforme se enumeraron en este Dictamen.

Respecto a la primera iniciativa formulada por la Diputada MARIANA ITALLIZIN GARCÍA GUILLÉN del partido MORENA propone adicionar nuevo artículo 169 del Título tercero relacionados con los delitos de peligro para la vida o la salud de las personas que "tiene como finalidad proteger el bienestar y la integridad física tanto de las mujeres que se encuentran embarazadas, y que son víctimas de abandono por parte del padre de sus hijos, así como al ser humano que se encuentra en gestación, sancionando de manera pecuniaria o corporal para el caso en el que la persona con quien la mujer ha concebido, se niegue injustificadamente a proporcionar alimentos, pudiéndose agravar dicha sanción cuando derivado del abandono de la mujer embarazada, resultare con alguna lesión, o se haya puesto en riesgo la salud o la integridad de ésta o la del producto en concepción en cualquier momento del embarazo. Así mismo, cuando derivado del abandono de la persona con quien ha concebido, se produzca la muerte de la mujer gestante o la muerte del producto en concepción en cualquier momento del embarazo. Por lo que se propone adicionar el artículo 169 Bis, en el cual se impondrá de seis meses a tres años de prisión y multa de ciento cincuenta a quinientas veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización, así como la privación de derechos familiares, a quien, abandone a una mujer a la que sabe ha embarazado". Al respecto en el análisis del planteamiento presentado esta COMISIÓN considera procedente el adicionar el nuevo supuesto jurídico para incorporar el denominado abandono injustificado de mujer embarazada, por los argumentos elaborados por la

proponente asumiendo con claridad, los términos de la descripción del tipo penal autónomo. Estableciendo la punición formulada, de seis meses a tres años prisión de acuerdo a la descripción del tipo. No obstante en la conceptualización de este, cuando se refiere a la posesión o propiedad del activo, para la disposición de recursos económicos y en caso de que abandone a la mujer embarazada se consideró necesario substituir el señalamiento de "a pesar de tener recursos económicos". Por el de aun cuando este cuente a su disposición de recursos materiales para su subsistencia". Pues dicho cambio de acuerdo a esta DICTAMINADORA, infiere mayor claridad en la intención de supuesto que abarca el Título de los Delitos de Peligro para la Vida o la Salud de las Personas, formando parte del catálogo de los deberes de asistencia familiar, que deja sin subsistencia a la mujer embarazada e hijo o hija no nato, siendo esta conducta que afecta directamente a estos sujetos pasivos por la conducta omisiva del activo, al no cumplir con su deber de asistencia familiar y con la obligación preexistente impuesta en la ley de proveer a la madre y al hijo o hija de los elementos económicos indispensables, para atender sus necesidades de subsistencia. Esta Dictaminadora, considera que es el abandono de familia y del deber ante esta, de la asistencia familiar, sido la conducta delictiva la omisión del deber de asistencia pudiendo clasificarse este delito como omisivo plurisubsistente, formal o de conducta de peligro permanente. La consumación del delito se realiza plenamente en el incumplimiento de esta responsabilidad. Asimismo con esta conducta se pone a la víctima o víctimas, en situación de peligro como consecuencia del abandono, objeto de la tutela penal que pretende la seguridad de la persona en su vida, su libertad, y en su integridad física. También para esta COLEGIADA le necesario describir, lo que se entiende en la doctrina penal como el concepto de Abandonar y "que gramaticalmente significa, dejar, desamparar, desistir de una cosa. Jurídicamente se concreta en el ámbito penal, al efecto producido por el desamparo en que se deja a una persona, ya se trate de un niño incapaz de cuidarse por sí mismo, a una persona mayor enferma, cuando en ambos casos se tiene la obligación de cuidarlos; Al abandono del cónyuge e hijos sin motivo justificado por el otro cónyuge obligado a la atención de su necesidades de subsistencia" Pavón Vasconcelos Francisco .Pág. 1 Diccionario de Derecho Penal. Edit. Porrúa. México 1997.

SEGUNDA.- Respecto a la iniciativa presentada por el diputado MARCO ANTONIO CABADA ARIAS del partido MORENA propone castigar la Mendicidad, cuando esta tenga en su origen de su realización, el que se "Obligue o Someta" a una persona a ejercer esta actividad contemplada ya en el Código Penal en el Capítulo que aborda la Corrupción de Menores de Edad o de quienes no

tienen capacidad para comprender el significado del hecho en el artículo 171. Al respecto el proponente argumenta que existen actualmente delincuentes, que obligan a los pasivos a ejecutar esta actividad. Forzándolos a ejecutar tal actividad. Y describe a ésta como "Quien mendiga, pide limosna o solicita el favor de otras personas, sustentándose parcial o totalmente de esta manera. A pesar de estar en pleno siglo XXI, muchas son las personas en todo el mundo que se encuentran llevando a cabo la mendicidad". Y el Iniciante, señala "que lo habitual, es que la mendicidad implique una solicitud de dinero a los transeúntes o automovilistas. El mendigo también puede instalarse en la puerta de un recinto como una iglesia o un hospital y pedir dinero a quienes ingresan. Los mendigos pueden solicitar otras cosas, como alimentos, ropa o medicinas. Lo que obtienen en las calles les permite, si es que reciben ingresos o algún otro tipo de ayuda." Asimismo el proponente reconoce la existencia de la Mendicidad Forzada y afirma que esta es muy común en el mundo y es una expresión de la conducta ilícita de lo que se denomina como Trata de Personas afectando directamente a "menores de edad, ancianos, incapaces y a gente común" Y retoma parte de lo que se sostiene en la página del gobierno de México que describe la Mendicidad forzada en el año 2020. Concluyendo en base a este argumento, en una parte de su exposición, "que el delito de Trata de Personas, se encamina a esclavizar a seres humanos con el fin de obtener beneficios económicos".

La propuesta del Legislador se inserta el Título de los denominados delitos contra el libre desarrollo de la personalidad referente a la Corrupción de personas menores de edad o de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho en la modalidad de la práctica de la Mendicidad. En el artículo 171 del Código Penal atendido. Esta COMISIÓN en el estudio de la propuesta planteada por el legislador sobre de la Mendicidad Forzada encontró que esta forma parte del delito de Trata de Personas y asume la procedencia de dicha iniciativa para ser insertada en el Código Penal del estado tal y como lo describe el Iniciante.

TERCERA.- Respecto a la iniciativa presentada por el diputado MARCO ANTONIO CABADA ARIAS del partido MORENA tiene como objetivo el de incluir en el capítulo de delitos cometidos en contra de un integrante de la familia y delitos por discriminación contra la dignidad de las personas el de ampliar el catálogo de supuestos que se contemplan en el artículo 201 Bis que describe la las acciones en contra del bien jurídico tutelado, al proponer que se incorpore la figura del lenguaje y las modificaciones corporales, como parte de este conjunto de referencias, que se vinculan o vincularán, en su caso con la

conducta discriminatoria que atenta contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades, que se describe como supuestos jurídicos en el artículo referido. Sin embargo esta COMISIÓN considera pertinente modificar la referencia aludida a "modificaciones corporales" pues dicha descripción puede atender la modificación del cuerpo o alguna parte del cuerpo. En este sentido la COLEGIADA comprende que la propuesta del legislador, en la exposición de sus motivos describe con claridad la intención de la existencia de la discriminación cuando una persona posee en su cuerpo los denominados TATUAJES, considerando, sin cambiar el sentido original de la propuesta del incitante que la adición al párrafo del artículo referido, debe ser, el del uso del lenguaje y en su caso sus particularidades o modismos, por considerar que este es un fenómeno sociológico y de vínculos de comunicación que evoluciona y se adapta con connotaciones esencialmente culturales, cuyo origen es el espacio territorial o regional, no encontrando al respecto contradicción con la propuesta. Sin embargo si se consideró de parte de la DICTAMINADORA modificar el planteamiento de "modificaciones corporales" por el de TATUAJES, por considerar que describe mejor el sentido del objetivo del legislador, así como el apropiado uso del lenguaje. Entendiendo que este es conjunto multi-diverso de pintas, dibujos esquemas plasmados en el cuerpo, de manera voluntaria e informada, y puede ser sujeto de discriminación a él que lo porta de manera permanente o temporal. Al respecto se considera que debe incluirse la palabra TATUAJES en el catálogo del Texto Penal que protege el bien jurídico que tutela la dignidad humana y los derechos de las personas y sus libertades individuales referidas a cualquier práctica de discriminación o exclusión social. En tal sentido para fortalecer el argumento esta DICTAMINADORA cree necesario mencionar lo que se entiende cultural y sociológicamente en nuestro tiempo como Tatuaje no sin coincidir con la exposición breve, que el proponente menciona en su motivación "Es una modificación temporal permanente del color de la piel, en el que se crea un dibujo, una figura o un texto y se plasma con agujas u otros utensilios que inyectan tinta o algún otros pigmentos bajo la epidermis de una persona. Hay muchos tipos de tatuajes, algunos son temporales otros los más conocidos son permanentes. Su historia abarca desde tiempos remotos se manifiesta en la Polinesia, Egipto, en el Continente Americano, en el Lejano Oriente, en el Medio Oriente. Existen diversos estilos. Actualmente el tatuaje ya no se considera como representación de culturas antiguas, moda pasajera o alusión a la criminalidad, sino como un arte. Existen museos del tatuaje en el mundo" Consultar :Historia de los tatuajes. Tatuaje en el antiguo Egipto. New guides Tatto time line.Hepatitis C salud bioética .Tatuajes rosas .historia

y cultura de los tatuajes .Tatuajes con motivos artísticos .Wikipediatatuaje.Tatatuje de la Polinesia. "Tatouage paru dans le" .educalingo dic tatauaje web.Antropologia del cuerpo y al performance .com.Buenos Aires Argentina.

CUARTA.- Respecto a la iniciativa presentada por la diputada MARIANA ITALLITZIN GARCÍA GUILLÉN del partido MORENA esta COMISIÓN coincide con los argumentos vertidos por la proponente al establecer el fraude denominado como familiar que consiste, cuando en el matrimonio o concubinato, se produce el divorcio o separación de las partes, quedando en litis los bienes materiales que resultan de la unión, contratados bajo el régimen patrimonial de la sociedad conyugal establecida en el Código Civil del estado Libre y Soberano de Guerrero número 358 en su artículo 437. Al respecto la Legisladora plantea el supuesto de que es un "problema insoslayable cuando ocurre el divorcio que alguno de los integrantes de la unión, con el ánimo de perjudicar al otro, traspasa o pone los bienes a nombre de otra persona o de algún familiar, afectando el patrimonio de la contraparte, así como a las hijas e hijos destruyendo la masa de este cuando en el contrato matrimonial se estipulo el régimen conyugal existiendo jurídicamente en las decisiones judiciales en su caso, disposiciones, criterios, acuerdos de distribución en caso de ocurrir la separación jurídica por la figura del divorcio". En tal sentido esta DICTAMINADORA, considera adicionar en la disposición propuesta, para hacer más clara la descripción de la intención de la Legisladora, el de señalar con claridad el estatuto del régimen de separación de bienes en la mencionada adición del nuevo artículo, sin que pierda el sentido original de la propuesta y evitando con ello interpretaciones, que él o la juzgadora, puedan encontrar con dificultad, al tratarse del patrimonio familiar desde la unión hasta la disolución jurídica del vínculo existente por la figura del divorcio. Protegiendo el bien jurídico tutelado de obligaciones respecto al patrimonio producido durante la unión matrimonial en el régimen de sociedad conyugal.

QUINTA.- Respecto a la iniciativa presentada por las diputadas NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MARIANA ITALLIZIN GARCÍA GUILLEN, BLANCA CELENE ARMENTA PIZA, NILSAN HILARIO MENDOZA y el diputado, LUIS ENRIQUE RÍOS SAUCEDO del grupo parlamentario del partido MORENA. Que establece como objetivo el de aumentar "las penas por sustracción de menores de ocho a veinticuatro años y de ochenta a doscientos cuarenta días de multa; Por sustracción de menores por alguno de sus progenitores se le impondrá prisión de seis a doce años y de cuarenta a ciento veinte días multa; por robo de infante al que entregue o reciba un infante menor de siete años de edad, sin

consentimiento de quien legalmente dependa, con el propósito de obtener un beneficio económico, se le aplicará prisión de nueve a dieciocho años y de seiscientos a mil quinientos días multa. Cuando el delito lo cometa un familiar del infante, que ejerciendo o no la custodia legal se le impondrá de ocho a dieciséis años de prisión y de seiscientos a mil doscientos días multa. "Durante el examen de la previsión del hecho punible y de la antijuricidad que lleva implícita, esta COMISIÓN considera, que sobre este hecho antijurídico el mismo debe ser castigado por parte del Estado con el aumento de la pena, como consecuencia individualizada de la probable comisión del delito, de parte del actor planteada por los Iniciantes. La COMISIÓN en este orden de ideas considera procedente la propuesta de incrementar la pena formulada y el pago de multa que se señala en la proposición adaptando la propuesta a lo que Ley obliga debe tasarse como la Unidad de Medida y Actualización, en la disposición a reformar por los proponentes por la gravedad de los delitos tipificados y por la protección del bien jurídico tutelado por el Estado, que es entre otras cosas el del desarrollo normal de las niñas, niños y adolescentes. Pero señalando antes lo que la doctrina penal comprende como definición de la pena "Esta es una de las sanciones penales. La pena constituye el objeto mismo del derecho penal, siempre que se considera la expresión sanciones penales en un muy amplio sentido, como aquellos medios con que el Derecho Punitivo previene y reprime a la delincuencia... Consecuentemente para muchos, la pena constituye un mal originado en la comisión de un delito, esto es la disminución de un bien preciado para el autor, concepto que vincula delito y pena. El primero como presupuesto y la segunda como consecuencia jurídica. Si el derecho es conjunto de normas jurídicas reguladoras de la conducta del hombre, su noción quedaría mutilada si no se acude al concepto de coacción... La noción de sanción, es pues la razón misma de validez del derecho, dado que solo la amenaza a quien infringe sus mandatos, (lato senso) es la garantía de su permanencia. De allí que la certeza de la pena es precisamente el medio que responde a la justicia penal... Se ha dicho reiteradamente que la ordenación penal representa, por una parte un dispositivo de defensa contra el delito constituido por la pena, cuya función eminentemente represiva está vinculada al hecho delictivo contemplado desde la culpabilidad del autor; Por otra parte tal ordenación penal tiene también una función preventiva, referida a la persona del propio autor, la cual funciona en atención a la mayor o menor peligrosidad del mismo" Pavón Vasconcelos Francisco .Diccionario de Derecho Penal .Edt. Porrúa 1997. Página 765-766.

Como la materia atender ocupa el castigo por medio de las punibilidad a conductas vinculadas a la sustracción de menores; A la sustracción de menores por algunos de los progenitores y al robo de infante, contemplados el Código Penal del estado de Guerrero número 499. En sus artículos 210, 211, 212. Al respecto esta COMISIÓN para efectos de la resolución respectiva coincide con los Legisladores cuando mencionan que "El Registro Nacional de Personas Extraviadas de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, menciona que en los casos de desaparecidos entre cero y doce años de edad, son encontrados el setenta por ciento de los niños extraviados, y se resuelven sesenta y siete por ciento de los casos de sustracciones ilegales por parte de familiares ascendentes y/o parientes. Las políticas necesarias para la atención del problema de robo de menores, son insuficientes, puesto que no es un problema nuevo y México se ha decidido por atenderlo un poco tarde. En Estados Unidos se implementó desde 1996 la Alerta Amber, para atender la desaparición de niños. Mientras que en México se consolidó la implementación de la Alerta Amber hasta el año 2002, con la designación de un Coordinador Nacional de Aleta Amber, y dejó de implementarse la búsqueda de los menores pasadas setenta y dos horas de la desaparición. De acuerdo con datos de la periodista Marlén Castro, en Guerrero de los ciento veintiséis menores desaparecidos entre enero de 2017 y mayo de 2019, solo cuarenta han sido recuperados, señala además que, la actividad de la Alerta Amber en el estado tiene una efectividad del 30%. La primera vez que se implementó la Alerta Amber en Guerrero, fue el 23 de enero de 2017 por la desaparición de Santiago de la Cruz Ramírez, de 17 años, de Acapulco, quien aún no ha aparecido. La mayoría de niñas y niños perdidos de acuerdo a las activaciones de la Alerta Amber son de Chilpancingo (47), de Acapulco (31), Zihuatanejo (8), Iguala (7), el resto han ocurrido en diversos municipios como Tixtla, Chilapa y Tecpan. Revisando los datos proporcionados por la página oficial de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, de la Alerta Amber, podemos encontrar el listado de los reportes de menores que han desaparecido así como los que han sido localizados. De acuerdo con el portal y los datos contenidos hasta la fecha de presentación de esta iniciativa, en Guerrero existe un total de noventa y un niños, niñas y jóvenes desaparecidos, con rangos de edades desde uno hasta quince años de edad. Sin embargo, queda en el aire la cifra real de menores desaparecidos, puesto que el listado de la Fiscalía corresponde a las desapariciones reportadas, pero aquellos que no se denuncian queda en el olvido, alejados del umbral de la justicia, ignorados bajo el cobijo del silencio. Debido a la presente situación y cada día de mayor preocupación por parte de padres de familia y la sociedad en general, se pretende endurecer las penas

contempladas en el Código Penal del Estado de Guerrero, para que los delitos antes mencionados, se castiguen de forma ejemplar"

Es así que esta COLEGIADA considera pertinente el aumento de la acción punible contemplada en los artículos señalados.

SEXTA.- Respecto a la iniciativa presentada por la diputada MARIANA ITALLITZIN GARCÍA GUILLÉN del partido MORENA en la cual plantea que "la población civil ha estado expuesta a todos estos delitos mencionados ejercidos por los integrantes de organizaciones criminales, y en particular, a delitos tales como: robos de bienes materiales, desapariciones, reclutamiento forzado y homicidios de familiares. Además, la presencia del ejército mexicano en las calles de las principales ciudades agitadas por el crimen ha sido percibida por la sociedad como una causa más de inseguridad. Ciertas violaciones a los derechos humanos ejercidas por autoridades municipales, estatales y federales (tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas) se pueden calificar de generalizadas o sistemáticas, y miles de civiles han muerto en fuego cruzado o como víctimas directas del crimen organizado. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos ha realizado un estudio por medio de información cuantitativa y cualitativa sobre el desplazamiento interno forzado. Mientras que por un lado, se han obtenido datos mediante diversos análisis estadísticos, uso de encuestas y de información censal, por otro, se ha recopilado información cualitativa por medio de la documentación de testimonios directos de 140 familias víctimas del desplazamiento interno, y mediante el monitoreo continuo de la prensa nacional y local. Estos esfuerzos no nos permiten aún establecer la magnitud real del fenómeno, pero sí confirman su existencia y su gravedad, al mismo tiempo que nos permite identificar las tendencias del desplazamiento en los últimos años. El creciente desplazamiento interno se presenta de las zonas rurales a las ciudades y viceversa. De forma paralela a la migración hacia Estados Unidos y Canadá, el desplazamiento interno forzado tiene su origen sobre todo en Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Michoacán, Guerrero y Veracruz. Al permanecer dentro del territorio nacional, no cuentan con una categoría legal como desplazados y por tanto, no cuentan con el régimen de protección que otorga el derecho internacional. Por ello, el gobierno en turno, tiene la responsabilidad de reconocer y crear un marco jurídico para atender, proteger y asistir las necesidades especiales que requieren los desplazados; y tiene la obligación de garantizar todos sus derechos. Las víctimas de desplazamiento son por lo general niños, niñas y adolescentes, indígenas,

estudiantes, profesionistas, adultos mayores, campesinos, pequeños propietarios de negocios, empresarios, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, funcionarios públicos y mayoritariamente mujeres, madres de familia que ante eventos de violencia se ven obligadas a huir con la finalidad de salvaguardar su vida y la del resto de su familia llevando con ellas niñas, niños y ancianos. El desplazamiento en México ha sido tanto un recurso reactivo como preventivo. Las y los desplazados huyen de sus hogares de residencia habitual ya sea como consecuencia de actos criminales y violaciones de derechos humanos. Por su parte, en nuestro estado. De acuerdo con el reporte anual de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Guerrero superó a Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa, dejándolo como el estado de la República mexicana donde más personas se desplazan de sus hogares, esto debido a los conflictos violentos que se han suscitado en el año 2018. De lo anterior, por lo menos 5 mil 56 personas en Guerrero tuvieron que dejar sus hogares, posicionándolo como el primer lugar del país. Mientras que Chiapas tiene reportadas 5 mil 35 personas; Sinaloa enlistó 860; Oaxaca tan sólo 300 y Michoacán reporta 240 personas. Explica que en esta entidad suriana los afectados pertenecen a 22 comunidades de ocho municipios, donde se reportaron más agresiones de grupos delictivos, lo que llevó a catalogar al menos 13 distintos. Los ocho municipios con estos altos índices de desplazamiento forzado por hechos de violencia son San Miguel Totolapan, Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Zitlala, Apaxtla, Ajuchitlán del Progreso, Petatlán y La Unión. Dentro del informe se informa que para los registros en cada estado se tomaron en cuenta los hechos de desplazamiento donde se movían un mínimo de 10 familias o 50 personas. La Comisión registró que las personas desplazadas se establecieron en Chichihualco, Iguala, Chilpancingo, y Cuernavaca, principalmente. Su intento de retorno registrado el 17 de noviembre fue en vano, pues la caravana que era resguardada por el Ejército y la Policía del Estado fue atacada a balazos cuando cruzaban por Los Morros. También se registraron 12 desplazamientos más que se detallan a continuación: el 10 de abril de 2018 un grupo de 92 personas abandonó sus hogares en las comunidades de Laguna de Hueyanalco, San Bartolo y Jimotla, del municipio de San Miguel Totolapan, debido a la violencia provocada por los grupos delictivos de la Familia Michoacana y Los Tequileros. Los desplazados se refugiaron en Atoyac. El 17 de julio otro grupo de 131 personas originarias de la comunidad de Las Ventanas, en San Miguel Totolapan, abandonó sus hogares, y se trasladó también a Atoyac. A la fecha de publicación del reporte no se registró el regreso a sus comunidades. Los habitantes de Las Ventanas, familias de ganaderos y agricultores, ya no podían salir libremente a sus

casas por el temor de ser baleados por los grupos del crimen organizado. De acuerdo con testimonios, a las familias cada vez les era más difícil salir a trabajar debido a los ataques con balaceras, a los que también estaban expuestas mujeres y menores de edad. En Leonardo Bravo, 600 personas de la comunidad de Corralitos, y 300 de la Las Palmas, huyeron el 9 de junio a causa de enfrentamientos armados protagonizados por grupos delictivos. Las 900 personas se desplazaron hacia Tlacotepec y Chichihualco. En este caso se registró un retorno parcial de 16 familias que regresaron a la comunidad de Corralitos en el mes de octubre. El 5 de enero, en Apaxtla salieron de manera forzada 900 personas de la comunidad de San Felipe del Ocote, debido a la violencia generada por grupos armados. Los desplazados se refugiaron en la cabecera municipal y no se ha reportado su regreso. El 5 de enero de 2018, más de 900 habitantes de San Felipe del Ocote se vieron obligados a huir como consecuencia de un ataque perpetrado por una célula de la familia michoacana. Desde hace más de 10 años, los pobladores de San Felipe eran obligados a proveer de alimento, agua y hospedaje a presuntos integrantes de la familia michoacana. El ataque fue un acto de represalia. Los vecinos de esta localidad habían defendido al operador de una máquina que estaba emparejando la carretera de terracería que lleva a San Felipe. La intención del grupo delictivo era secuestrarlo y pedir dinero para liberarlo. También en Apaxtla, pero en la comunidad de San Pedro de los Limones, aproximadamente 86 personas abandonaron sus casas el 12 de enero debido a constantes hechos de violencia generados por grupos delictivos, por lo que se refugiaron en la cabecera municipal. El 20 de marzo, en las localidades de San Bartolo y Laguna de Hueyanalco, en San Miguel Totolapan, 100 personas huyeron y se refugiaron en el municipio de Tecpan. Estas familias abandonaron sus hogares por temor a morir en enfrentamientos armados protagonizados por grupos delictivos. En las localidades de Los Horcones y Las Mesas de Cerro Azul, del municipio de Ajuchitlán del Progreso, se registró el desplazamiento de 306 personas, quienes huyeron al municipio de Tecpan. De estos hechos se reportó que las familias decidieron abandonar sus casas tras la irrupción de un grupo armado, el cual sacó a las familias de sus viviendas, las incendió, y robó ganado. Otras 132 personas de la comunidad de Tlaltempanapa, del municipio de Zitlala, huyeron de su localidad el 6 de noviembre. Abandonaron sus hogares por la violencia que generaban grupos armados en la región. Todas las personas se refugiaron en el municipio de Copalillo. Estas víctimas tampoco han regresado a sus casas. En otro hecho ocurrido entre el 5 y el 9 de septiembre en la comunidad de Carrizal, de Leonardo Bravo, alrededor de 225 personas se desplazaron a Chilpancingo, Chichihualco y Cuernavaca debido a hechos de violencia

provocados por grupos armados. Las comunidades de El Zapotillal y Las Canalejas, en el municipio de Petatlán, registró otro de los desplazamientos masivos. El 4 de octubre abandonaron sus casas 112 personas de ambas comunidades debido a amenazas de un grupo de sicarios que trabaja para la familia michoacana. Las víctimas se refugiaron en localidades de la región Costa Grande. En el municipio de La Unión se registró el desplazamiento de 41 personas que huyeron a Tijuana, baja California. Se reportó que entre el 19 y el 21 de enero de 2018 tuvo lugar una persecución en La Unión y Buenavista Tomatlán (perteneciente a Michoacán) donde grupos armados -presuntamente pertenecientes al cártel de Los Viagras- motivaron el desplazamiento forzado de al menos 82 personas." En este breve resumen de lo expuesto por la Legisladora, esta DICTAMINADORA coincide con los argumentos motivaciones formuladas y comparte con ella, el planteamiento de adición al Código Penal que establece la protección del bien jurídico tutelado relacionado con la libertad y dignidad de las personas y su seguridad jurídica de protección a la vida tanto en su integridad como en su patrimonio y del pleno respeto a sus derechos civiles y Humanos.

En tal sentido a esta COLEGIADA, le es pertinente apuntar los siguientes elementos para sostener que los argumentos de coincidencia con la Iniciante. De acuerdo a la agencia de la ONU para los refugiados UNHCR-ACNUR en su informe titulado Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado en 2018, describe que en el año 2018 "La población global de desplazados forzosos aumento en 2,3 millones en 2018. A finales del año, 70.8 millones de personas se vieron desplazadas debido a la persecución, los conflictos, la violencia y la violación de los derechos humanos. Como resultado, sus números globales, se situaron de nuevo en una cifra record.. Y para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados Filippo Grandi "lo que se está viendo con estas cifras es una nueva confirmación de la tendencia creciente a largo plazo de personas urgidas de seguridad respecto a guerras, conflictos y persecuciones".

En el mencionado documento como efecto de la investigación realizada por esta agencia de la ONU la UNHCR-ACNUR sostiene que "A los largo de la última década, la población global de desplazados forzosos creció sustancialmente de 43.3 millones de 2009 a 70,8 millones en 2018 y alcanzó una cifra record. La mayor parte, de este aumento se dio entre 2012 y 2015, provocado sobre todo por el conflicto Sirio. Pero otros conflictos en distintas zonas también contribuyeron a este aumento, incluidos los de Irak y Yemen en Oriente Medio, la República Democrática del Congo y Sudan del Sur en el África Subsahariana, así como la llegada masiva de refugiados de Rohingya a Bangladesh al

final del año 2017. En 2018 cabe destacar particularmente el aumento del número de desplazados por los desplazamientos internos de Etiopía y las nuevas solicitudes de asilo de los que huían de la República Bolivariana de Venezuela. La proporción de población mundial desplazada también siguió subiendo, dado que el aumento de la población desplazada por la fuerza rebaso el crecimiento de la población mundial. En total, la población refugiada bajo el mandato de la ACNUR casi se ha duplicado desde 2012"UNHCR-ACNUR.La agencia de la ONU para los refugiados .Tendencias Globales .Desplazamiento Forzado en 2018 .Edt ACNUR .2019 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados Ginebra ,Suiza ACNUR .ORG.COM.

También para la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos AC. en su informe realizado sobre el desplazamiento interno en México del año 2018, establece como diagnóstico social las causas y consecuencias de este fenómeno, del cual no se encuentra exento el estado de Guerrero "Entre las diversas consecuencias generadas por la situación de violencia e inseguridad imperante en México, se encuentra el desplazamiento interno forzado de la población. El control de carteles y grupos del crimen organizado sobre diversas áreas del territorio, donde se registran prácticas como el reclutamiento y trabajo forzado, así como extorsiones y cobros de cuota de piso; los conflictos políticos, territoriales y religiosos, en los cuales en ocasiones actúan grupos de carácter paramilitar; los enfrentamientos entre los grupos delincuenciales entre sí o con las fuerzas armadas, autoridades y demás cuerpos de seguridad; las amenazas, ataques y otras formas de violencia frecuente y generalizada, entre otras situaciones obligan, año con año, a decenas de miles de personas a huir de sus hogares a lo largo del territorio nacional. Algunos desplazamientos ocurren de forma reactiva frente a agresiones y hechos específicos de violencia, mientras otros ocurren de forma preventiva, frente a agresiones y hechos específicos de violencia, cuando las personas huyen para evitar ser víctimas de las distintas expresiones de violencia presentes en su entorno. El desplazamiento puede ocurrir de forma individual, cuando se deslaza una persona o un núcleo familiar o masiva, cuando se desplazan varias personas y familias, o incluso toda una comunidad. En cualquiera de sus vertientes este fenómeno afecta con mayor intensidad a quienes se encuentran en alguna situación de esencial vulnerabilidad por ejemplo niñas, niños y adolescentes mujeres, adultos mayores, personas indígenas, periodistas personas defensoras de derechos humanos, personas en situación de desplazamiento forzado prolongado y aquellas que viven en situación de pobreza o pobreza extrema." Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos AC. En

Episodios de desplazamiento Interno Forzado en México .Informe 2018. 166 Pág.WWW.CMDPH.ORG

En este orden de ideas el marco jurídico penal Federal, también realizó en la adición para establecer en el mes de abril del año 2019, la incorporación de esta conducta antijurídica al Código Penal Federal, al crear el artículo 287 Bis. Dicha resolución se produjo en la Cámara de Diputados, estableciendo, el delito de desplazamiento forzado interno, que se sustenta entre otras cosas, en la existencia de aproximadamente -en esa fecha- de más de 300 mil mexicanos desplazados en el país. En la descripción penal mencionada el castigo aumenta si se cometen contra niñas, niños, defensores de los derechos humanos y periodistas.

En suma esta COMISIÓN, coincide con la propuesta de la Legisladora y considera pertinente adicionara a la misma la figura de los grupos vulnerables aludidos en el argumento vertidos anteriormente, como las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, periodistas y defensores de los derechos humanos como grupos expuestos y vulnerables ante los delincuentes. Considerando que este delito deberá ser perseguido con la figura de oficio, al ser un asunto de orden público e interés social. Por su relevancia social que implica por sí misma la vigencia del contrato social entre el estado y el pueblo, donde el primero debe garantizar su seguridad y libertad y que esta DICTAMINADORA discurre enunciar lo que se entiende por Orden Público, para efectos de esta resolución y no se preste a subjetividades en la descripción conceptual de esta categoría política comprendiendo que este "es la situación de normal funcionamiento de las Instituciones públicas y privadas en las que las autoridades ejercen sus atribuciones propias y las personas ejercen pacíficamente sus derechos y libertades. Es el núcleo, el aspecto central y más sólido y perdurable del orden social. Es el conjunto de aquellas características y valores de la convivencia que una sociedad considera como no negociable. Se lo considera sinónimo de convivencia ordenada, segura, pacífica y equilibrada. Es objeto de una fuerte reglamentación legal, para su tutela preventiva contextual, sucesiva o represiva. En el derecho Constitucional se lo considera como el límite para el ejercicio de los derechos individuales y sociales. El derecho Internacional público también considera la existencia de un orden público Internacional, formado por los principios constitucionales de la comunidad de naciones; Es el límite de la actividad contractual y de la práctica consuetudinaria interestatal". www.wikipedia.com / www.Eumed.net enciclopedia virtual.com.

También se adaptó a la redacción, para dejar en claro la presunción del supuesto jurídico, que implica el acto intimidatorio y violento, generando temor en el pasivo o pasivos y la protección de los bienes jurídicos tutelados por el Estado como garante de la seguridad jurídica de la población. Implicando con ello, el mejor uso del lenguaje en materia penal para no dejar lagunas a la interpretación en el juicio del caso en concreto. Igualmente se aumentó el castigo pecuniario, por considerar que la multa de la proponente era demasiado baja al castigar al activo probado cuando este provocó dolosamente el desplazamiento forzado de habitantes de un domicilio o una localidad. Compartiendo que el castigo a los activos de dicha conducta jurídica no debe ser menor pues como se señala en la motivación "solo de esa manera se podrá revertir y sancionar este fenómeno cuando las personas huyen de sus hogares de residencia habitual, por consecuencias de actos criminales y violaciones de derechos humanos, o bien, como consecuencia del temor fundado de ser víctima ante un clima generalizado de inseguridad."

SÉPTIMA.- Respecto a la iniciativa presentada por diputado HÉCTOR OCAMPO ARCOS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, esta COMISIÓN DE JUSTICIA considera procedente el planteamiento del Iniciante en los tres artículos de reforma que se proponen modificar. Y coincide en los motivos que animan dicha propuesta, cuando afirma... "La flexibilidad de las penas en el robo de ganado, sigue manifestándose constantemente de forma preocupante, causando un grave impacto social al resultar ser una actividad ilícita que ha aumentado exponencialmente y que ha propiciado la proliferación de personas que han hecho del delito de robo de ganado su forma de vida Por lo tanto, se han presentado múltiples iniciativas ante el Congreso de la Unión sobre este tema, sin embargo, es hasta el 2017, en que se aprobaron reformas y adiciones al Código Penal Federal, en donde tipifica el delito de "abigeato" y se eleva al fuero federal, cuyo sustento jurídico lo encontramos en los artículos 381 Bis, 381 Ter y 381 Quáter, en la cual se agregaron agravantes y se incrementó la pena con el fin de frenar este delito que tanto daño le ha hecho al campo mexicano, en donde además se incluyó una definición más amplia de lo que es el ganado. En el ámbito local, nuestra entidad se caracteriza por tener un potencial ganadero importante y debe fomentarse esta actividad para propiciar el crecimiento y desarrollo económico; por esta razón, las instituciones encargadas de vigilar el orden público y bienestar colectivo, deben contar con instrumentos legales precisos que permitan combatir los flagelos que hoy amenazan la cohesión social. Es por eso, que esta figura típica penal debe

actualizarse para ser eficaz al momento de su aplicación. Actualmente en nuestra legislación local, esta conducta antijurídica se encuentra contemplada en el Código Penal del Estado, en el Título Décimo Tercero denominado, delitos contra el patrimonio, y específicamente dentro del Capítulo I denominado, robo; se encuentra previsto el objeto de la presente iniciativa, en lo concerniente al "robo de ganado", por lo que es precisamente el patrimonio de manera general y en su sentido más amplio, el bien jurídico tutelado en el título de referencia. Por ello, es necesaria una adecuación en la legislación penal local, para que esté en armonía con la legislación federal, ya que al ser considerado el robo de ganado una práctica común y como un delito no grave, quienes incurren en él, la mayoría de los casos salen pagando fianzas muy bajas e incluso por debajo del valor del ganado robado, lo que se traduce en atractivas ganancias para quienes cometen este ilícito; asimismo los altos índices de corrupción de las autoridades locales en muchas regiones ganaderas del país, han propiciado que los dueños del ganado ya no presenten denuncias, en buena medida por el grado de impunidad, corrupción y debilidad de las leyes. Con la presente propuesta, se pretende que el delito se castigue con penas más altas y que el sector ganadero vuelva a tener la confianza de presentar sus denuncias y así evitar el robo de ganado mayor, menor y aves de corral, que día a día se acrecienta, provocando a los ganaderos un problema latente afectando a su patrimonio y su economía. Ante la evolución que ha tenido el tipo penal de robo de ganado a la fecha y ante el aumento de las penas realizadas al Código Penal del Estado en diversos delitos de robo, esto no ha sido suficiente para inhibir la comisión de este delito, sino todo lo contrario, ha ido en incremento y en detrimento de la sociedad, la intención de la presente iniciativa es perfeccionar el delito de robo de ganado mayor, menor y aves de corral estipulados en el Código Penal en vigor. El aumento considerable de esta conducta ilegal, ha propiciado que la comunidad ganadera del estado, haya manifestado un justo reclamo social y ante estas considerables peticiones, es necesario reformar el Código Penal en vigor, con la finalidad de establecer una nueva estructura punitiva; por lo que se pretende es buscar reducir los índices de delitos cometidos sobre el ganado en la entidad. En este tenor, el delito de robo de ganado, en su redacción actual en el artículo 233 del Código Penal en cita, dispone de manera general el "apoderamiento de ganado ajeno" que para la consumación del robo resulta solo suficiente que el autor tenga en su poder la cosa robada. Conducta que al actualizar el delito, deja de lado otras que sin lugar a dudas deben contemplarse como equiparadas en el Código Penal del Estado. Al no contemplar el Código Penal del Estado, el supuesto específico del robo de

ganado calificado, se debe tomar en cuenta que la legislación en mención determine oportunamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que la persona responsable exteriorice la conducta delictiva, lo anterior con el objetivo de proteger la integridad física y psicológica de la víctima, ya que al mismo tiempo puede emplear como medio la violencia física o moral para cometer el hecho punible. Con el proyecto de decreto en comento, se cumple con un doble propósito: salvaguardar la riqueza ganadera del país, fortaleciendo el carácter garantista de nuestra legislación penal. Y atender la demanda social en el sentido de aumentar las penas aplicables a los responsables del delito de robo de ganado, que atentan contra el patrimonio de las personas que se dedican a esta actividad. Esta iniciativa tiene como objeto actualizar, perfeccionar y hacer efectivo el tipo penal del robo de ganado y haciéndolo congruente con la realidad que se vive en Guerrero, ante la evidente necesidad de responder al aumento de la criminalidad, particularmente en el sector de la ganadería, con acciones que garanticen la acción decisiva del Estado; delito que lesiona económicamente tanto a los ganaderos como a la sociedad misma, además de que se trastoca la tranquilidad de las comunidades rurales y la seguridad familiar. En ese orden de ideas y atendiendo la gravedad de la pena debe ser proporcional a la del hecho antijurídico, al grado de afectación del bien jurídico protegido, como lo es en este caso, el patrimonio, ya que la norma jurídica penal, de aplicación en el ámbito local, ha sido insuficiente para sancionar a los transgresores de la ley, por lo que es necesario que se dé un tratamiento penal más severo; por cuanto a las conductas agravantes de este delito, ya que el tipo penal no tiene como objeto proteger una cosa o un bien, sino un actividad de subsistencia y su proceso de comercialización”

Esta Dictaminadora después de atender la iniciativa y entrar al estudio de la misma, considera que en los términos plantado por el Iniciante son pertinentes para fortalecer el bien jurídico tutelado por el estado y agravando la pena y describiendo el tipo penal en cuanto a la conducta antijurídica del activo, pues lesiona el patrimonio del pasivo, la economía privada y regional siendo el abigeato un delito cuya historia se remonta a siglos pero que su manifestación más evidente se produce durante el siglo XIX, XX y XXI. Durante su punición en América en algunos países era castigado con la pena muerte sumaria. Dicho delito No ha sido suprimido de los diferentes Códigos Penales de México. Hoy el abigeato o robo de ganado en muchas regiones de México por organizaciones delictivas que planifican dicha actividad. Los modernos cuatreros venden el ganado en diferentes zonas y rastros clandestinos y establecidos creando el mercado negro y el sacrificio de animales, por consecuencia sin ningún

control sanitario y sin dolor. Actualmente el robo de ganado según diversas denuncias de asociaciones ganaderas durante el último año aumento el 50 % lesionando a la actividad económica, dañando la cadena del sistema producto, produciendo delitos paralelos graves como el homicidio, el secuestro, la extorsión. En suma este delito se está convirtiendo en problema grave para Guerrero y para el País porque su impacto se refleja en una de las actividades productivas y de autoconsumo afectando directamente el patrimonio y su salvaguarda Recientemente en diversas instancias se han manifestado la necesidad de incrementar la punición a este delito, pues son hoy grupos organizados delincuenciales los que mayoritariamente realizan esta actividad antijurídica, tal es el caso en el año 2018 que en cinco entidades del país se realiza esta actividad. Pero también el ilícito se lleva a cabo en el estado de Guerrero. La necesidad de aumentar el castigo va acompañado durante todo el año pasado y en los primeros meses del año 2020 por organizaciones ganaderas y ganaderos, de legisladores federales y por otras voces en demanda a la autoridades federales de seguridad pública de que se implementen estrategias para prevenir y combatir, por la gravedad que este está teniendo avanzando hacia la condición de alerta. Describiendo en las denuncias que antes hace unos años el robo de ganado se realizaba en los cruces de carreteras pero hoy la modalidad ha mutado y grupos criminales acuden directamente en grupos armados a los ranchos ganaderos donde se roban con equipos vehículos, grúas, grandes cantidades de reses .www.razon.com 20 de noviembre 2019. El Heraldó de México Robo de ganado abigeato.com 2020.

En este orden de ideas en la mayoría de los estados se está exigiendo la necesidad de ampliar las penas, a los modernos cuatreros y a las organizaciones de delincuencia organizada que los impulsan y protegen para poder iniciar y garantizar que esta actividad productiva se realicen con plenas garantías plenas en todo el sistema o sistema producto que se encuentran enlazados con ella. Pues sin Seguridad Jurídica ninguna actividad productiva, puede tener éxito o viabilidad sobre todo de aquellos mexicanos y guerrerenses que dedican su actividad cotidiana a actividades lícitas y al trabajo honrado y al fomento de la producción y la economía, como son los que se dedican a la ganadería y su fomento. En este Orden de ideas esta DICTAMINADORA considera que debe de incrementar la punibilidad expresada en el aumento de la pena, con sus agravantes señaladas por el legislador. Además esta COMISIÓN consideró oportuno mantener en el supuesto aludido del artículo 232 del Código Penal, la hipótesis de aquel servidor público que permita o participe como cómplice en el robo de ganado mayor o menor o de aves de corral lo dispuesto en la norma vigente por considerar

que su claridad describe una acción de punición. Pudiendo prestarse a una falta de claridad y a un vacío, si se deroga, considerando la vigencia de la misma como necesaria. De este modo se amplió la multa en caso de robo de aves de corral por considerar insuficiente la multa al activo. Igualmente se razonó y definió incluir la reparación del daño en el tipo penal a reformar "que es el deber que la Ley pone a cargo del delincuente, de resarcir al ofendido el menoscabo patrimonial sufrido por la obra y ejecución del delito e indemnizarlo, en su caso respecto a las ganancias ilícitas que haya dejado de percibir o del patrimonio menoscabado del pasivo." Pavón Vasconcelos Francisco .Diccionario de Derecho Penal pág. 888. Edt Porrúa México DF. 1999.

OCTAVA.- Respecto a la iniciativa presentada por diputada LETICIA MOSSO HERNÁNDEZ, del Partido del Trabajo que sostiene en su exposición que "El Estado de Guerrero es uno de los estados con mayor población indígena en el país representando aproximadamente el 15% de nuestros habitantes, sin embargo, es uno de los que presentan mayor rezago en cuanto desarrollo social y económico de México. Lo anterior se ve reflejado en que nuestra población cuenta con menores ingresos y que no tiene la oportunidad de acceder a la banca comercial por lo cual dicho sector se ve en la necesidad de recurrir a las cajas de ahorro populares con mayor frecuencia que alguien que cuenta con ingresos mayores a los establecidos en la línea de bienestar mínimo Un ejemplo en el estado de Guerrero fue el fraude cometido por el Corporativo Teo`s a través de la Firma o Productos Amor, quienes usaron tres sociedades anónimas para captar recursos de 16 mil 500 ahorradores junto a las Cooperativas Tlapaneca, Cofia, Las Tres Mixtecas, Azteca y Covadonga. Cabe mencionar que en la lista de los municipios donde se defraudó a las personas en el estado de Guerrero, la mayoría son municipios de alta y muy alta marginación, donde más del 80% de sus habitantes habla una lengua originaria, tal es el caso de los municipio de Cochoapa el Grande y Metlatónoc, de igual manera toda la región de la montaña alta del estado de Guerrero se vio afectada por esta agresión, cometida principalmente contra nuestros hermanos indígenas, que en su mayoría son migrantes que mandan dinero a su familia desde Estados Unidos, que con mucho esfuerzo y en pequeñas cantidades logran reunir en largos años de trabajo. En todo el país proliferaron las cajas de ahorro, que ofrecen atractivos rendimientos y préstamos flexibles, pero a cambio de estar al margen de la regulación y las garantías al ahorrador que otorga el sistema bancario. Se ha pervertido la función de las cajas de ahorro, aunque las familias mexicanas de clase baja y media han recurrido a ellas por su falta de participación en el mercado financiero ya que en esencia las cajas de ahorro son

una organización colectiva de ayuda mutua y de compromiso con la comunidad, pero hoy no hay nada más alejado de la realidad que eso. La Ley de Ahorro y Crédito Popular publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2001, endureció las reglas de creación y supervisión de las cajas de ahorro, sin embargo, no ha detenido el creciente delito en contra de personas de medianos y bajos recursos que necesitan liquidez. Así mismo, en agosto de 2009, la Cámara de Diputados expidió la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y préstamo. Es decir, reglamentación legal la hay, pero la complejidad de la norma jurídica hace que se dificulte la aplicación de la misma. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, (CONDUSEF), muchas de las cooperativas de ahorro y crédito que no tienen registro, no están supervisadas por ningún organismo gubernamental y, por lo general, no ofrecen garantía a sus socios, no obstante, resultan atractivas para aquellas personas que desean formar un ahorro o recibir un préstamo, aunque manejan tasas de interés muy altas a los ahorradores (hasta del 45 por ciento en algunos casos) y los intereses que cobran por concepto de préstamo son excesivamente caros, pero disfrazados como créditos baratos. El segmento de ahorradores de cajas de ahorro y crédito, es uno de los más sensibles de la población, pues está conformado por gente de escasos recursos, indígenas que muchas veces no hablan español pero reciben remesas del extranjero, jubilados o pensionados que depositan su esperanza de vida en sus ahorros, es el 13 por ciento de los ahorradores totales del país y es deber de este pleno proteger el escaso recurso económico de este segmento. Cabe mencionar que la presente iniciativa no trasgrede el principio de proporcionalidad de la pena, sobre todo si contemplamos que existen argumentos lógicos y jurídicos para poder aumentar la misma en el tipo penal de fraude cuando el sujeto pasivo es una persona indígena, que por su condición podría quedar en desventaja del sujeto activo del delito”.

En este sentido, ésta COMISIÓN en el análisis de la propuesta motivada considera procedente, la propuesta de adición al artículo del Código Penal atendido en el apartado que describe la conducta antijurídica descrita como fraude al adicionar que cuando este ocurra en contra de personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas y éstos, no hablen o entiendan correctamente el idioma español aumentando con ello la pena al activo que usando y abusando de su conocimiento e información engañe a los más débiles dejándolos en el desamparo. Castigo que se requiere incluir en el dispositivo penal. También para la DICTAMINADORA le es relevante apuntar, que se concibe para la Doctrina Penal, como Fraude “La palabra gramaticalmente es

engaño, acción contraía a la verdad o a la rectitud. Se define como la antijurídica apropiación de un bien patrimonial ajeno sin compensación y mediante el engaño... El Fraude constituye un delito con previsión genérica... La conducta del Fraude consiste en engañar a alguien o en aprovechándose del error en que otro se encuentra. Ello significa, realizar los actos necesarios y adecuados para colocar al paciente en estado subjetivo de error ya existente en el pasivo. Son formas de comportamiento que implican voluntad en el agente. Sin embargo el hecho fraudulento requiere no solo esa conducta, sino el resultado que el tipo describe en hacerse ilícitamente de una cosa o bien obtener un lucro indebido. Efectos estos que deben estar en relación causal con la acción o la omisión comisiva del autor. El engaño ha sido considerado por la Doctrina Penal, como el típico medio para cometer el fraude o estafa y construye el elementos que distingue este delito de los otros de carácter patrimonial, caracterizándose por ser un artificio, un ardid o trampa, empleada para provocar en la víctima un estado de error sobre las características de una cosa, un acontecimiento o un hecho y que facilita al agente la obtención ilícita de una cosa o de un lucro indebido. Engañar a una persona es adoptar una actitud mentirosa, para hacer incurrir a una persona en una creencia falsa... El aprovechamiento del error supone la preexistencia en la víctima de un concepto equivocado sobre las cosas o los hechos, error que aprovecha el activo para obtener una cosa o un lucro... El momento consumativo del delito se opera en el instante mismo que el agente obtiene la entrega de la cosa o el lucro indebido resultado causal del engaño empleado o del aprovechamiento del error." Pavón Vasconcelos Francisco.Ob.cit. pág. 512.

En este orden de ideas la COMISIÓN considera la inclusión de la proponente en el dispositivo legal a reformar por las motivaciones formuladas al proteger al grupo social enunciado.

NOVENA.- Respecto a la iniciativa presentada por la diputada EUNICE MONZÓN GARCÍA y el diputado MANUEL QUIÑONEZ CORTES, integrantes de del Partido Verde Ecologista de México, ellos motivan su planteamiento basados en la adición a el capítulo II referente a la atenuación de la punibilidad por arrepentimiento del sujeto activo y de la reparación del daño en los artículos 364 y 365 del Código Penal en la que se establecen que se tiene la obligación de garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, para el desarrollo y bienestar de toda persona, así como la responsabilidad generada por los daños del deterioro ambiental y humano que se ocasione. Y formulan la adición de reforma "para que la autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, podrá reducir las penas correspondientes para los delitos previstos en este título hasta la mitad, cuando el imputado o procesado repare o compense voluntariamente el daño

al ambiente antes de que tal obligación le haya sido impuesta por resolución administrativa o sentencia judicial. Dicha disminución procederá también, cuando se realice o garantice la reparación o compensación del daño en términos de lo dispuesto en la Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de Guerrero y sostienen respecto a la reparación del daño que se realizaran las acciones necesarias para restablecer las condiciones ecológicas a un estado anterior a la realización del hecho ilícito, y en su caso, la compensación del daño al ambiente así como, el pago de las correspondientes indemnizaciones por los daños que se ocasionen a la salud y a la integridad de las personas así como, por los daños y perjuicios que se deriven de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de Guerrero.”

En este orden de ideas la DICTAMINADORA considera la procedencia de la propuesta y se resalta que durante el estudio de la misma, se consideró añadir a ésta sin que perdiera el sentido y objetivo de la misma, el de incluir la realización de peritajes o peritaje con cargo al imputado, que permitan conocer si se reparó o se realizó la compensación ambiental correspondiente, para que se ejecute, la atenuación de la punibilidad por arrepentimiento del activo y esta pueda operar plenamente. Al considerar que los bienes jurídicos tutelados de naturaleza ambiental pueden poseer las características renovables y en otras muchas ocasiones su condición es irrecuperable. Al respecto el Estado como ente superior debe proteger el patrimonio de todos y todas lo que implica la permanencia de la sustentabilidad y viabilidad ambiental como la base del espacio único donde habitamos siendo responsabilidad compartida la vitalidad y equilibrio de este. En tal sentido la COLEGIADA considera que las adiciones de reforma propuestas son como procedentes para ser integradas al Código Penal del estado en materia ambiental. Y se establecieron el mecanismo como la realización del peritaje y la emisión del dictamen profesional como efecto de este para probar plenamente que se realizó la conducta de arrepentimiento o compensación, según sea el caso para la atenuante del castigo en turno como elementos de la reparación del daño, considerando mantener los supuestos jurídicos descritos enriqueciéndolos con la propuesta de los motivantes que amplían y aseguran el bien jurídico tutelado que es el medio ambiente en sus diferentes variantes.

DÉCIMA.- Para facilitar la comprensión de la propuesta presentada y su mejor entendimiento, esta COMISIÓN, exhibe gráficamente el cuadro comparativo, entre el Texto Vigente y las Propuestas de Modificación correspondientes.

CÓDIGO PENAL NÚMERO 499 TEXTO VIGENTE	CÓDIGO PENAL NÚMERO 499 PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN.
<p>Artículo 171. ...</p> <p>...</p> <p>A quien induzca a la práctica de la mendicidad, se le impondrán de tres a seis años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Artículo 204 Bis. Discriminación. Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas:</p> <p>De la I a la III...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p>Artículo 171. ...</p> <p>...</p> <p>A quien induzca, obligue o someta cualquier persona a la práctica de la mendicidad, se le impondrán de tres a seis años de prisión y de trescientas a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Artículo 204 Bis. ... Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua _tatuajes, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas:</p> <p>De la I a la III...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>

<p>...</p> <p>Artículo 210. Sustracción de menores</p> <p>Al que sin tener relación familiar o de parentesco sustraiga a un menor de edad o a un incapaz, sin el consentimiento de quien legítimamente tenga su custodia o guarda, o lo retenga con la finalidad de violar derechos de familia, se le impondrá prisión de dos a seis años y de veinte a sesenta días multa.</p> <p>....</p> <p>....</p> <p>Artículo 211. Sustracción del menor por alguno de los progenitores,</p> <p>Cuando exista separación temporal o definitiva entre el padre y la madre de un menor o incapaz decretada por un Juez y cualesquiera de ellos, lo sustraiga o retenga con la finalidad de suspender o privar de la guarda o custodia a quien la venía ejerciendo, sin el consentimiento de éste y sin que medie una resolución judicial, se le impondrá prisión de tres a seis años y de veinte a sesenta días multa.</p> <p>...</p> <p>Del a).-al c) ...</p> <p>...</p> <p>Artículo 212. Robo de infante</p>	<p>...</p> <p>Artículo 210. ...</p> <p>Al que sin tener relación familiar o de parentesco sustraiga a un menor de edad o a un incapaz, sin el consentimiento de quien legítimamente tenga su custodia o guarda, o lo retenga con la finalidad de violar derechos de familia, se le impondrá prisión de ocho a veinticuatro años y de ochenta a doscientos cuarenta de multa de la Unidad de Medida y Actualización.</p> <p>....</p> <p>....</p> <p>Artículo 211. ...</p> <p>Cuando exista separación temporal o definitiva entre el padre y la madre de un menor o incapaz decretada por un Juez y cualesquiera de ellos, lo sustraiga o retenga con la finalidad de suspender o privar de la guarda o custodia a quien la venía ejerciendo, sin el consentimiento de éste y sin que medie una resolución judicial, se le impondrá prisión de seis a doce años y de cuarenta a ciento veinte días de multa de la Unidad de Medida y Actualización.</p> <p>...</p> <p>Del a).-al c) ...</p> <p>...</p> <p>Artículo 212. ...</p>
--	--

Al que entregue o reciba un infante menor de siete años de edad, sin consentimiento de quien legalmente dependa, con el propósito de obtener un beneficio económico, se le aplicará prisión de **tres a seis años** y de doscientos a quinientos días multa.

Cuando el delito lo cometa un familiar del infante, que ejerciendo o no la custodia legal se le impondrá de **cuatro a ocho años** de prisión y de trescientos a seiscientos días multa, sancionándose además, con la pérdida de la patria potestad, tutela, custodia, guarda o educación y en su caso, de los derechos sucesorios con respecto de la víctima.

Artículo 232. Robo de aves de corral

El robo de aves de corral se sancionará con diez a cincuenta días de trabajo a favor de la comunidad o con veinte a cien días multa. En caso de reincidencia o habitualidad la sanción será de seis meses a un año de prisión.

Las penas previstas en este artículo y en los artículos 230 y 231 se aplicarán a quien, siendo director, administrador o encargado de algún rastro o lugar de matanza, permita o autorice el sacrificio de ganado o aves de corral robados.

Al servidor público que participe en el robo de ganado, sea mayor o menor, o de aves de corral, además de las penas previstas en los artículos anteriores, se le impondrá destitución e inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el servicio público de uno a tres años.

Al que entregue o reciba un infante menor de siete años de edad, sin consentimiento de quien legalmente dependa, con el propósito de obtener un beneficio económico, se le aplicará prisión de **nueve a dieciocho años y de seiscientos a mil quinientos días multa de la Unidad de Medida y Actualización.**

Cuando el delito lo cometa un familiar del infante, que ejerciendo o no la custodia legal se le impondrá de **ocho a dieciséis años** de prisión y de **seiscientos a mil doscientos** días multa, sancionándose además, con la pérdida de la patria potestad, tutela, custodia, guarda o educación y en su caso, de los derechos sucesorios con respecto de la víctima.

Artículo 232. ...

El robo de aves de corral se sancionará con diez a cincuenta días de trabajo a favor de la comunidad o veinte a **doscientos días de multa de la Unidad de Medida de Actualización.** En caso de reincidencia o habitualidad la sanción será de seis meses a un año de prisión.

Se equiparará al delito de apoderamiento de robo de ganado, y se sancionará con la penalidad correspondiente, según se trate de ganado mayor, menor o aves corral, el sacrificio de ganado sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo.

Las penas previstas en este artículo y en los artículos 230 y 231 se aplicarán a quien, siendo director, administrador o encargado de algún rastro o lugar de matanza, permita o autorice el

<p>Artículo 364. Atenuación de la punibilidad por arrepentimiento del sujeto activo</p> <p>La autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, podrá reducir las penas correspondientes para los delitos previstos en este título hasta tres cuartas partes, cuando el agente haya restablecido las condiciones de los elementos naturales afectados al estado en que se encontraban antes de realizarse la conducta, y cuando ello no sea posible, ejecutando las acciones u obras que compensen los daños ambientales que se hayan generado.</p>	<p>sacrificio de ganado o aves de corral robados.</p> <p>Al servidor público que participe en el robo de ganado, sea mayor o menor, o de aves de corral, además de las penas previstas en los artículos anteriores, se le impondrá destitución e inhabilitación para desempeñar el servicio público en cualquier modalidad.</p> <p>Artículo 364. ...</p> <p>La autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, podrá reducir las penas correspondientes para los delitos previstos en este título hasta la mitad, cuando haya sido verificado o verificados por medio de peritajes técnicos-profesionales y por la emisión del dictamen correspondiente que permitan probar que dicha reparación o compensación se haya realizado completamente por el imputado o procesado al reparar o compensar voluntariamente el daño al ambiente, antes de que tal obligación le haya sido impuesta por resolución administrativa o sentencia judicial y / o el agente haya restablecido las condiciones de los elementos naturales afectados al estado en que se encontraban antes de realizarse la conducta y cuando ello no sea posible, ejecutando las acciones u obras que compense los daños ambientales que se hayan generado. Dicha disminución procederá también, cuando se realice o garantice la reparación o compensación del daño ambiental en términos de lo dispuesto por la Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de Guerrero. Los costos</p>
---	---

Artículo 365. Reparación del daño

...

I. La ejecución de las acciones necesarias para restaurar las condiciones de los elementos naturales afectados, al estado en que se encontraban antes de la realización del delito, y cuando ello no sea factible, la ejecución de acciones u obras que permitan compensar los daños ambientales que se hayan generado, y si ninguna de ellas fuera posible, el pago de una indemnización que se utilizará para la autoridad competente en materia ambiental, en beneficio de los elementos naturales afectados, y

II. ...

Artículo 169 BIS NO EXISTE

del estudio pericial y del dictamen mencionado en este artículo correrán a cargo del imputado o procesado. La autoridad referida en este artículo propondrá a los técnicos-profesionistas que realicen dicho peritaje según sea el caso.

Artículo 365. ...

...

I. La realización, ejecución de acciones y obras necesarias para restablecer o restaurar las condiciones naturales ecológicas afectadas del estado anterior en las que se encontraban el medio ambiente, antes de la realización del hecho ilícito, y en su caso, la compensación del daño ambiental y el pago de las correspondientes indemnizaciones por los daños que se ocasionen a la salud y a la integridad de las personas así como, por los daños y perjuicios que se deriven de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de Guerrero.

II. ...

Artículo 169 BIS.- Abandono injustificado de mujer embarazada. Se impondrá de seis meses a tres años de prisión, multa de ciento cincuenta a quinientas veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización, y privación de derechos familiares, a quien, a pesar de que este cuente a su disposición de recursos materiales para su subsistencia, abandone a una mujer a la que sabe ha embarazado, si ésta

<p>Artículo 205 Bis NO EXISTE.</p> <p style="text-align: center;">NO EXISTE CAPITULO III <i>Delito de Desplazamiento Interno Forzado.</i></p> <p>Artículo 220 Bis. NO EXISTE</p>	<p>carece de los recursos necesarios para atender a su alimentación, habitación y salud.</p> <p>Pudiéndose incrementar un tercio de las sanciones especificadas en el párrafo anterior, cuando derivado del abandono resultare con lesiones o se haya puesto en riesgo la salud de la mujer embarazada o en riesgo la salud del producto concebido.</p> <p>De igual manera se incrementará la pena hasta la mitad, cuando derivado del abandono y debido a las lesiones se produjera la muerte de la mujer o la del producto concebido.</p> <p>Artículo 205 Bis. Fraude Familiar. A quien en detrimento del régimen patrimonial del matrimonio en sociedad conyugal generado durante este o el concubinato, oculte, transfiera o adquiera a nombre de terceros bienes, se le aplicará prisión de uno a cinco y multa de trescientos sesenta veces de la Unidad de Medida y Actualización.</p> <p style="text-align: center;">Capítulo III. Delito de Desplazamiento Interno Forzado.</p> <p>Artículo 220 Bis.- Se impondrán de seis a doce años de prisión y de tres mil a nueve mil quinientos días de multa de la Unidad de Medida de Actualización, a quien sin derecho ni fundamento, de manera individual o colectiva, pretenda poseer, usar, ocupar u otra modalidad, de forma temporal o permanente. Mediante el uso de la violencia de cualquier tipo o por cualquier medio o acto o</p>
---	--

acciones coactivas e intimidatorias, con portación y uso de armas de fuego o sin ellas, planifique, promueva organice, realicen, ejecute u otra actividad relacionada, en contra de una persona o grupo de personas, que ocasione que abandonen su lugar de residencia, domicilio, patrimonio, posesiones, vivienda causando con ello agravio en sus derechos humanos forzando su desplazamiento en el territorio del Estado de Guerrero o fuera de él, como efecto del temor fundado provocado por el activo.

Aumentará al doble de la pena cuando este delito se cometa contra grupos vulnerables, entre ellos niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, periodistas y defensores de los derechos humanos.

Este delito y su comprobación requerirá de querrela y deberá ser perseguido por la autoridad ministerial respectiva por ser un asunto de orden público e interés social.

No se entenderá por desplazamiento interno forzado el movimiento de población que realice la autoridad cuando tenga por objeto la seguridad de la población.

Artículo 232 Bis. Agravantes genéricas.

El delito de robo de ganado se considera calificado y se aumentará la pena hasta en una mitad más, según se trate de ganado mayor, menor o aves de corral, y se establecerá la reparación del daño material cuando:

<p>Artículo 232 Bis. Agravantes genéricas. NO EXISTE</p>	<p>I. Se ejecute de noche;</p> <p>II. Sea cometido por quien tenga una relación laboral, o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con el propietario del ganado;</p> <p>III. Se ejecute mediante violencia física o moral;</p> <p>IV. Cuando sea cometido por un servidor público municipal, estatal o federal, o por integrantes de instituciones de seguridad pública;</p> <p>V. Cuando la conducta a que se refiere este artículo se cometa por una asociación delictuosa o delincuencia organizada;</p> <p>VI. Si el sujeto activo se valiere de una discapacidad, enfermedad o vulnerabilidad del ofendido;</p> <p>VII. Si el que lo cometa se hiciera pasar por autoridad;</p> <p>VIII. Cuando el ganado fuere de registro para el mejoramiento genético; y,</p> <p>IX. Cuando el sujeto activo fuere integrante de una asociación o unión de productores ganaderos o empleado de éstas.</p> <p>Artículo 232 Ter. Agravantes específicas:</p> <p>1</p> <p>Se consideran como conductas agravantes del delito de robo de ganado mayor, menor o aves de corral y se aumentará la pena prevista al tipo de ganado según se</p>
---	--

<p>Artículo 232 Ter. Agravantes específicas: NO EXISTE</p>	<p>trate, hasta en otra mitad más, cuando:</p> <p>I. Se altere o elimine con planchas, alambres y argollas o remarque los fierros, las marcas de herrar, consistentes en letras, números y signos combinados entre sí, en ganado mayor o ganado menor;</p> <p>II. Se marque, contramarque, señale o contra señale ganado, animales ajenos en cualquier parte sin derecho;</p> <p>III. Se expidan certificados falsos para obtener guías, simulando ventas o haga conducir animales que no sean de su prioridad sin estar debidamente autorizado para ello, o haga uso de certificados para cualquier negociación sobre ganado o pieles ajenas; y,</p> <p>IV. Se apodere de una o más cabezas de ganado propio, que se halle en poder de otro, en virtud de una relación contractual o por mandato de autoridad</p> <p>Artículo 237. ...</p> <p>...</p> <p>De la I-a la IV...</p> <p>Se aumentará en una mitad la pena, cuando el delito se cometa a personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas y éstos, no hablen o entiendan correctamente el idioma español.</p>
<p>Artículo 237. Fraude</p>	

...	
De la I-a la IV...	
párrafo Segundo NO EXISTE	

DECIMA PRIMERA.- Que esta Dictaminadora, no encontró presunción y elementos que pudieran contravenir a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, o contradicción con normas de carácter general en las propuestas atendidas. Fue así que esta reforma y adición al Código Penal vigente del estado libre y soberano incorpora los siguientes tipos y penalidades que los acompañan, con la descripción hipotética que se presentaron por parte de las legisladoras y el legislador”.

Que en sesiones de fecha 04 de agosto del 2021, el Dictamen en desahogo recibió primera y dispensa de la segunda lectura, por lo que en términos de lo establecido en los artículos 262, 264 y 265 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, la Presidencia de la Mesa Directiva, habiendo sido expuestos los motivos y el contenido del Dictamen, al no existir votos particulares en el mismo y no habiéndose registrado diputados en contra en la discusión, se preguntó a la Plenaria si existían reserva de artículos, y no habiéndose registrado reserva de artículos, se sometió el dictamen en lo general y en lo particular, aprobándose el dictamen por unanimidad de votos.

Que aprobado en lo general y en lo particular el Dictamen, la Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado realizó la Declaratoria siguiente: “Esta Presidencia en términos de nuestra Ley Orgánica, tiene por aprobado el Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 499. Emítase el Decreto correspondiente y remítase a las Autoridades competentes para los efectos legales conducentes”.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 fracción I de la Constitución Política Local, 227 y 287 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, este Honorable Congreso decreta y expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 843 POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO NÚMERO 499.

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforman el párrafo segundo del artículo **171**; el párrafo primero del artículo **204 bis**; primer párrafo del artículo **210**; primer párrafo del artículo **211**; artículo **212**; artículo **232**; artículo **364**; la fracción I del artículo **365** del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, Número 499 para quedar como sigue:

Artículo 171. ...

...

A quien induzca, **obligue o someta cualquier persona** a la práctica de la mendicidad, se le impondrán de tres a seis años de prisión y **de trescientas a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización.**

...

...

Artículo 204 Bis. ...

Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, **tatuajes**, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas:

De la I a la III...

...

...

...

...

...

Artículo 210. ...

Al que sin tener relación familiar o de parentesco sustraiga a un menor de edad o a un incapaz, sin el consentimiento de quien legítimamente tenga su custodia o guarda, o lo retenga con la finalidad de violar derechos de familia, se le impondrá prisión de **ocho a veinticuatro años y de ochenta a doscientos cuarenta de multa de la Unidad de Medida y Actualización.**

....

....

Artículo 211. ...

Cuando exista separación temporal o definitiva entre el padre y la madre de un menor o incapaz decretada por un Juez y cualesquiera de ellos, lo sustraiga o retenga con la finalidad de suspender o privar de la guarda o custodia a quien la venía ejerciendo, sin el consentimiento de éste y sin que medie una resolución judicial, se le impondrá prisión de **seis a doce años y de cuarenta a ciento veinte días de multa de la Unidad de Medida y Actualización.**

...

Del a) al c) ...

...

Artículo 212. Robo de infante

Al que entregue o reciba un infante menor de siete años de edad, sin consentimiento de quien legalmente dependa, con el propósito de obtener un beneficio económico, se le aplicará prisión de **nueve a dieciocho años y de seiscientos a mil quinientos días multa de la Unidad de Medida y Actualización.**

Cuando el delito lo cometa un familiar del infante, que ejerciendo o no la custodia legal se le impondrá de **ocho a dieciséis años** de prisión y de **seiscientos a mil doscientos** días multa, sancionándose además, con la pérdida de la patria

potestad, tutela, custodia, guarda o educación y en su caso, de los derechos sucesorios con respecto de la víctima.

Artículo 232. Robo de aves de corral

El robo de aves de corral se sancionará con diez a cincuenta días de trabajo a favor de la comunidad o veinte a **doscientos días de multa de la Unidad de Medida de Actualización**. En caso de reincidencia o habitualidad la sanción será de seis meses a un año de prisión.

Se equiparará al delito de apoderamiento de robo de ganado, y se sancionará con la penalidad correspondiente, según se trate de ganado mayor, menor o aves de corral, el sacrificio de ganado sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo.

Las penas previstas en este artículo y en los artículos 230 y 231 se aplicarán a quien, siendo director, administrador o encargado de algún rastro o lugar de matanza, permita o autorice el sacrificio de ganado o aves de corral robados.

Al servidor público que participe en el robo de ganado, sea mayor o menor, o de aves de corral, además de las penas previstas en los artículos anteriores, se le impondrá destitución e inhabilitación para desempeñar **el servicio público en cualquier modalidad**.

Artículo 364. ...

La autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, podrá reducir las penas correspondientes para los delitos previstos en este título hasta **la mitad, cuando haya sido verificado o verificados por medio de peritajes técnicos-profesionales y por la emisión del dictamen correspondiente que permitan probar que dicha reparación o compensación se haya realizado completamente por el imputado o procesado al reparar o compensar voluntariamente el daño al ambiente, antes de que tal obligación le haya sido impuesta por resolución administrativa o sentencia judicial y/o el agente haya restablecido las condiciones de los elementos naturales afectados al estado en que se encontraban antes de realizarse la conducta, y cuando ello no sea posible, ejecutando las acciones u obras que compensen los daños ambientales que se hayan generado. Dicha disminución procederá también, cuando se realice o garantice la reparación o compensación del daño ambiental en términos de lo dispuesto por la Ley Número 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Guerrero. Los costos del estudio pericial y del dictamen mencionado en este artículo correrán a cargo del imputado o procesado. La autoridad referida en este artículo**

propondrá a los técnicos-profesionistas que realicen dicho peritaje según sea el caso.

Artículo 365. ...

...

I. La realización, ejecución de acciones y obras necesarias para restablecer o restaurar las condiciones naturales ecológicas afectadas del estado anterior en las que se encontraban el medio ambiente, antes de la realización del hecho ilícito, y en su caso, la compensación del daño ambiental y el pago de las correspondientes indemnizaciones por los daños que se ocasionen a la salud y a la integridad de las personas así como, por los daños y perjuicios que se deriven de conformidad a lo dispuesto en la Ley Número 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, y

II. ...

ARTÍCULO SEGUNDO: Se adicionan el artículo **169 bis**; artículo **205 bis**; el **Capítulo III** "Delito de desplazamiento interno forzado" con su respectivo artículo 220 Bis, del Título Décimo Primero Delitos contra la paz de las personas y la inviolabilidad del domicilio; artículo **232 bis**; artículo **232 ter**; párrafo segundo al artículo **237** del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Número 499 para quedar como sigue:

Artículo 169 Bis. Abandono injustificado de mujer embarazada

Se impondrá de seis meses a tres años de prisión, multa de ciento cincuenta a quinientas veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización, y privación de derechos familiares, a quien, a pesar de que este cuente a su disposición de recursos materiales para su subsistencia, abandone a una mujer a la que sabe ha embarazado, si ésta carece de los recursos necesarios para atender a su alimentación, habitación y salud.

Pudiéndose incrementar un tercio de las sanciones especificadas en el párrafo anterior, cuando derivado del abandono resultare con lesiones o se haya puesto en riesgo la salud de la mujer embarazada o en riesgo la salud del producto concebido.

De igual manera se incrementará la pena hasta la mitad, cuando derivado del abandono y debido a las lesiones se produjera la muerte de la mujer o la del producto concebido.

Artículo 205 Bis. Fraude Familiar

A quien en detrimento del régimen patrimonial del matrimonio en sociedad conyugal generado durante este o el concubinato,

oculte, transfiera o adquiera a nombre de terceros bienes, se le aplicará prisión de uno a cinco años y multa de trescientos sesenta veces de la Unidad de Medida y Actualización.

Título Décimo Primero

Delitos contra la paz de las personas y la inviolabilidad del domicilio

Capítulo III

Delito de desplazamiento interno forzado

Artículo 220 Bis. Se impondrán de seis a doce años de prisión y de tres mil a nueve mil quinientos días de multa de la Unidad de Medida y Actualización, a quien sin derecho ni fundamento, de manera individual o colectiva, pretenda poseer, usar, ocupar u otra modalidad, de forma temporal o permanente, mediante el uso de la violencia de cualquier tipo o por cualquier medio o acto o acciones coactivas e intimidatorias, con portación y uso de armas de fuego o sin ellas, planifique, promueva organice, realicen, ejecute u otra actividad relacionada, en contra de una persona o grupo de personas, que ocasione que abandonen su lugar de residencia, domicilio, patrimonio, posesiones, vivienda causando con ello agravio en sus derechos humanos forzando su desplazamiento en el territorio del Estado de Guerrero o fuera de él, como efecto del temor fundado provocado por el activo.

Aumentará al doble de la pena cuando este delito se cometa contra grupos vulnerables, entre ellos niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, periodistas y defensores de los derechos humanos.

Este delito y su comprobación requerirá de querrela y deberá ser perseguido por la autoridad ministerial respectiva por ser un asunto de orden público e interés social.

No se entenderá por desplazamiento interno forzado el movimiento de población que realice la autoridad cuando tenga por objeto la seguridad de la población.

Artículo 232 Bis. Agravantes genéricas

El delito de robo de ganado se considera calificado y se aumentará la pena hasta en una mitad más, según se trate de ganado mayor, menor o aves de corral, y se establecerá la reparación del daño material cuando:

I. Se ejecute de noche;

II. Sea cometido por quien tenga una relación laboral, o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con la persona propietaria del ganado;

III. Se ejecute mediante violencia física o moral;

IV. Cuando sea cometido por una servidora o servidor público municipal, estatal o federal, o por integrantes de instituciones de seguridad pública;

V. Cuando la conducta a que se refiere este artículo se cometa por una asociación delictuosa o delincuencia organizada;

VI. Si el sujeto activo se valiere de una discapacidad, enfermedad o vulnerabilidad del ofendido;

VII. Si el que lo cometa se hiciera pasar por autoridad;

VIII. Cuando el ganado sea de registro para el mejoramiento genético, y

IX. Cuando el sujeto activo sea integrante de una asociación o unión de productoras o productores ganaderos o empleada o empleado de éstas.

Artículo 232 Ter. Agravantes específicas

Se consideran como conductas agravantes del delito de robo de ganado mayor, menor o aves de corral y se aumentará la pena prevista al tipo de ganado según se trate, hasta en otra mitad más, cuando:

I. Se altere o elimine con planchas, alambres y argollas o remarque los fierros, las marcas de herrar, consistentes en letras, números y signos combinados entre sí, en ganado mayor o ganado menor;

II. Se marque, contramarque, señale o contra señale ganado, animales ajenos en cualquier parte sin derecho;

III. Se expidan certificados falsos para obtener guías, simulando ventas o haga conducir animales que no sean de su prioridad sin estar debidamente autorizado para ello, o haga uso de certificados para cualquier negociación sobre ganado o pieles ajenas, y

IV. Se apodere de una o más cabezas de ganado propio, que se halle en poder de otro, en virtud de una relación contractual o por mandato de autoridad.

Artículo 237. ...

...

De la I a la IV...

Se aumentará en una mitad la pena, cuando el delito se cometa a personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas y éstos, no hablen o entiendan correctamente el idioma español.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Guerrero.

SEGUNDO.- Remítase al titular del Poder Ejecutivo para su conocimiento para los efectos legales conducentes.

TERCERO.- Colóquese y publíquese en la página de la Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado de Guerrero, así como en las diferentes Redes Sociales del mismo, para su mayor difusión y conocimiento.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los cuatro días del mes de agosto del año dos mil veintiuno.

DIPUTADA PRESIDENTA.
EUNICE MONZÓN GARCÍA.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
CELESTE MORA EGUILUZ.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
SAMANTHA ARROYO SALGADO.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 90 numeral 1 y 91 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, promulgo y ordeno la publicación, para su debida observancia, del **DECRETO NÚMERO 843 POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL**

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO NÚMERO 499, en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veinticinco días del mes de agosto del año dos mil veintiuno.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO.

LIC. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES.

Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.

LIC. FLORENCIO SALAZAR ADAME.

Rúbrica.

DECRETO NÚMERO 845 POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 13 BIS DE LA LEY NÚMERO 468 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE GUERRERO.

HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a sus habitantes, sabed,

Que el H. Congreso Local, se ha servido comunicarme que,

LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, Y:

C O N S I D E R A N D O

Que en sesión de fecha 08 de agosto del 2021, las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, presentaron a la Plenaria el Dictamen con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 13 Bis de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, en los siguientes términos:

"METODOLOGÍA

En el apartado "**Antecedentes**" se da constancia del Proceso Legislativo turnado a esta Comisión, desde la presentación de la iniciativa hasta la formulación del presente dictamen.

En el apartado "**Contenido**" se señala el objeto y descripción de la iniciativa de Estudio.

En el apartado de "**Consideraciones**" esta Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de la iniciativa con el objeto de valorar su causa o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenta el Dictamen con Proyecto de Decreto Propuesto.

I. ANTECEDENTES

En la Sesión Plenaria del jueves 10 de octubre de 2019, el Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, tomó conocimiento de la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el que se adiciona el Artículo 13 Bis a la de la Ley No. 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, suscrita por el Dip. J. Jesús Villanueva Vega, misma que fue remitida a la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado por la Secretaría de Servicios Parlamentarios mediante Oficio No. LXII/2DO/SSP/DPL/0347/2019.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La propuesta materia del presente dictamen tiene por objeto:

Establecer la obligatoriedad de la Certificación de los Profesionales Contables que dictaminan las Cuentas Públicas de las entidades fiscalizables que son remitidas a la Auditoría Superior del Estado de Guerrero.

A través de:

Establecer la obligatoriedad de la certificación a través de adicionar el Art. 13 Bis a la Ley No. 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero.

III. MOTIVACIÓN DEL AUTOR DE LA INICIATIVA

El autor establece como motivación a su iniciativa lo siguiente:

Que la Rendición de Cuentas y Fiscalización de los recursos públicos han estado directamente relacionados con el desarrollo económico, social y político de las naciones.

Así, el combate a la corrupción en México, es, hoy en día, una de las prioridades del Gobierno Federal como parte de su plan de trabajo; por lo cual, en los últimos años, han

surgido nuevos organismos del estado cuyo objetivo es vigilar la correcta aplicación de los recursos percibidos por el Ejecutivo.

Conforme a ello, se han creado organismos especializados en el área de auditoría para comprobar la eficiencia y eficacia de las entidades gubernamentales, surgiendo así el concepto de este tipo de auditoría.

Que la auditoría es así, el examen profesional, objetivo, sistemático, constructivo y selectivo de evidencias, efectuado con posterioridad a la gestión de los recursos públicos, con la finalidad de:

- Determinar el cumplimiento de aspectos legales y la veracidad de la información financiera y presupuestal para el informe de resultados de auditoría.
- Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas.
- Determinar el grado de protección y empleo de los recursos.
- Fortalecer y aumentar el grado de economía, eficiencia y efectividad de su planeación, organización, dirección y control interno.
- Informar sobre los hallazgos significativos resultantes del examen, presentando comentarios, conclusiones y recomendaciones constructivas.

Por otro lado, que el instrumento normativo, la LEY NÚMERO 468 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE GUERRERO, define en su artículo 2º, a la fiscalización de la siguiente manera:

“Artículo 2. La fiscalización de la Cuenta Pública comprende:

I. La fiscalización de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos y demás disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos públicos, la deuda pública, incluyendo la revisión del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos, además de la información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho documento, conforme a las disposiciones aplicables; y

La práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos de los programas estatales y municipales.

Conforme a ello, la fiscalización que realiza la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (en adelante: ASE) se efectúa posterior a la gestión financiera, siendo de carácter externo y, por lo tanto, de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de control y fiscalización interna.

En este ejercicio de revisión del gasto programado a las cuentas públicas de los entes fiscalizables es práctica común que se determinen errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y observaciones cuantificables en términos monetarios, quedando pendiente por solventar cifras millonarias en contra del erario público.

Lo anterior no obstante que los entes fiscalizables son "asesorados" por despachos externos que no cuentan con los conocimientos de contaduría o auditoría gubernamental, lo que induce a procesos equívocos en la entrega de resultados, sanciones a los responsables y perjuicio al erario.

Desde esta perspectiva es necesario que la entrega de las cuentas públicas se profesionalice bajo las siguientes bases:

1. Que la información financiera gubernamental de las cuentas públicas que se presenten a la Auditoría Superior del Estado por parte de las entidades fiscalizables deberá ser dictaminadas por un contador público que cuente con certificación profesional vigente o en materia de contabilidad y auditoría gubernamental.

2. Que la expedición de la certificación correspondiente debe ser por una asociación de profesionistas de la contaduría que cuente a su vez con reconocimiento de validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública, y que se encuentre registrada ante la Auditoría Superior del Estado para expedir este tipo de reconocimientos de conocimientos especializados.

3. Que la Auditoría Superior del Estado deberá emitir las bases y requisitos para la integración y registro de un padrón de contadores facultados para elaborar los trabajos de dictaminación de la información financiera gubernamental de las cuentas públicas.

Respecto de las restricciones a derechos humanos, es criterio de esta Suprema Corte que éstos no son absolutos, pues pueden

restringirse bajo las condiciones que la Constitución Federal prevé y en términos de las leyes que se emitan por razones de interés general, a fin de evitar medidas o restricciones arbitrarias.

Al respecto, cabe citar la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LIBERTAD DE TRABAJO. NO ES ABSOLUTA DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE LA RIGEN (ARTÍCULO 5º., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).- Se transcribe

Por su parte, el artículo 5º. Constitucional autoriza la restricción a la libertad de trabajo en tres supuestos: cuando se trata de una actividad ilícita, cuando se afecten derechos de terceros y cuando se afecten derechos de la sociedad en general.

En consecuencia, una de las restricciones constitucionalmente válidas a la libertad del trabajo es la afectación a los derechos de terceros, lo cual implica, que la garantía no pueda ser exigida si la actividad a la que pretende dedicarse la persona, conlleva a su vez la afectación de un derecho preferente tutelado por la ley en favor de otro.

Ahora, en lo que interesa para este asunto, la intención de esta propuesta estriba en dar solución a dos problemas identificados en la integración de las cuentas públicas, a saber:

"1) La complejidad y sofisticación de las diversas etapas, procesos, insumos, conocimiento de las Normas Información Financieras que deben desarrollarse en la contabilidad y la auditoría gubernamental; y,

"2) La frecuencia con la cual, personas sin la preparación científica suficiente realizan estos procedimientos contables especializados.

La exigencia de este tipo de conocimiento superior, que incluye desde luego la obtención de la certificación correspondiente, no nueva en nuestro marco jurídico nacional, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha declarado constitucional la exigencia de la certificación de los médicos Cirujanos plásticos, al sostener dicho Alto Tribunal el siguiente criterio de jurisprudencia: SALUD. LOS ARTÍCULOS" 81 Y 272 BIS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO TRANSGREDEN EL DERECHO A LA LIBERTAD DE TRABAJO. Se transcribe

Conforme a la propuesta que la expedición de la certificación correspondiente debe ser hecha por una asociación de profesionistas de la contaduría que cuente a su vez con reconocimiento de validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública, y que se encuentre registrada ante la Auditoría Superior del Estado para expedir este tipo de reconocimientos de conocimientos especializados, tiene su motivación en el hecho de que los colegios y consejos de profesionales se crearon para ejercer un control sobre los profesionales de las diferentes áreas del conocimiento humano, conformado por profesionales en la materia, que debido a los conocimientos especializados que tienen, resultan ser las personas indicadas por reunir los requisitos de aptitud indispensables para mantener un mínimo de calidad en el servicios que prestan; y que si bien no son parte de la administración pública, ello no obsta para que puedan agruparse, y en su caso, supervisar la práctica profesional de sus agremiados porque de conformidad de la fracción X, del artículo 63 de la Ley Reglamentaria del Ejercicio Profesional para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, los colegios de técnicos y de profesionistas tendrán las siguientes facultades, para otorgar constancias de actualización y capacitación profesional.

De ahí que, el que se puedan integrar una íntima colaboración entre la ASE y los Colegios de Contadores con reconocimiento por la Secretaría de Educación Pública, para la supervisión de la práctica de integración de la cuenta pública, porque dichas agrupaciones especializadas se encuentran capacitadas para evaluar si los médicos profesionistas asociados cuentan con la capacidad y conocimientos suficientes para ejercer profesionalmente en el campo respectivo.

Esto se lograría adicionando el Art. 13 Bis a la Ley No. 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, como se propone a continuación:

Capítulo I Fiscalización de la Cuenta Pública

Título Segundo Fiscalización de la Cuenta Pública

Artículo 13 Bis.- La información financiera gubernamental de las cuentas públicas que se presenten a la Auditoría Superior del Estado por parte de las entidades fiscalizables deberán ser dictaminadas por un contador público, que cuente con certificación profesional del contador público vigente y lo en la disciplina de contabilidad y auditoría gubernamental, expedida por una asociación de profesionistas de la

contaduría pública, con reconocimiento de validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública, quien además deberá estar registrado ante la Auditoría Superior del Estado para realizar dicha dictaminación.

La Auditoría Superior del Estado deberá emitir las bases y requisitos para la integración y registro de un padrón de contadores certificados para elaborar los trabajos de dictaminación de la información financiera gubernamental de las cuentas públicas.

IV. CONSIDERACIONES

Tal y como lo señala el autor de la presente iniciativa, la profesionalización y especialización en los distintos campos de la Administración Pública es hoy por hoy una necesidad. Por ejemplo, dentro de las atribuciones del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, dependiente de la Secretaría de Gobernación Federal, existe un programa permanente de especialización y profesionalización dirigido a las administraciones locales.

Al igual que ocurre con las diferentes especialidades del Sector Salud, en donde, por ejemplo, un paciente que sufre de cáncer tiene que ser canalizado para su tratamiento con un especialista oncólogo, aunque el profesionista de primer contacto haya sido un Médico General; de la misma manera, las Cuentas Públicas Municipales, así como las Cuentas Públicas de las entidades sujetas a la fiscalización y auditoría de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, deben ser dictaminadas por un profesionista especializado en Contabilidad Gubernamental.

El precepto constitucional considerado por el proponente es del todo correcto, al señalar que no se viola el derecho al trabajo establecido en el Art. 5 Constitucional, como ya quedó establecido en las jurisprudencias señaladas en la exposición de motivos.

Por otro lado, la actualización de la Ley General de Contabilidad Gubernamental misma que desde su emisión en 2008 ha sido reformada en diversas ocasiones, siendo la última en enero de 2018, así como la actualización constante del marco jurídico que rige el sistema de control interno de la Administración Pública en México, obligan a que quienes elaboran las cuentas públicas y las dictaminan en las entidades locales sujetas a la fiscalización en el Estado de Guerrero, sean profesionistas especializados en la Contabilidad Gubernamental, la Auditoría a la Administración Pública y en general, al Sistema Anticorrupción. Además, con requerida actualización,

misma que solo podría verificarse a través de la certificación de sus conocimientos en la especialidad. Por ésta razón, esta comisión encuentra pertinente la adición propuesta, a fin de asegurar una mejora significativa en el proceso de fiscalización, reduciendo reprocesos, mejorando el control y garantizando el buen ejercicio en la rendición de cuentas.

Conforme a la propuesta que la expedición de la certificación correspondiente debe ser hecha por una asociación de profesionistas de la contaduría que cuente a su vez con reconocimiento de validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública, y que se encuentre registrada ante la Auditoría Superior del Estado para expedir este tipo de reconocimientos de conocimientos especializados, tiene su motivación en el hecho de que los colegios y consejos de profesionales se crearon para ejercer un control sobre los profesionales de las diferentes áreas del conocimiento humano, conformado por profesionales en la materia, que debido a los conocimientos especializados que tienen, resultan ser las personas indicadas por reunir los requisitos de aptitud indispensables para mantener un mínimo de calidad en el servicios que prestan; y que si bien no son parte de la administración pública, ello no obsta para que puedan agruparse, y en su caso, supervisar la práctica profesional de sus agremiados porque de conformidad de la fracción X, del artículo 63 de la Ley Reglamentaria del Ejercicio Profesional para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, los Colegios de Técnicos y de Profesionistas tendrán entre sus facultades, las de otorgar constancias de actualización y capacitación profesional.

Es importante destacar que el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 21 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, disponen que la Secretaría de Educación Pública (SEP), por conducto de la Dirección General de Profesiones, tiene entre sus atribuciones la de vigilar, con el auxilio de las asociaciones de profesionistas, el correcto ejercicio de las profesiones.

En nuestros días los servicios que prestan los profesionistas constituyen uno de los rubros más dinámicos del escenario internacional, propiciando la generación de procesos de apertura y competencia que han fomentado de manera importante su demanda y con ello una interacción del ejercicio profesional entre países.

La certificación profesional representa un medio idóneo para demostrar a la sociedad quiénes son los profesionistas que han

alcanzado la actualización de sus conocimientos y una mayor experiencia en el desempeño de su profesión o especialidad, con el propósito de mejorar su desarrollo profesional, obtener mayor competitividad y ofrecer servicios de alta profesionalización. Las asociaciones y colegios de profesionistas han desempeñado un papel destacado en la difusión de normas éticas y en el ejercicio honrado y digno de la actividad profesional. Algunos han desarrollado esquemas de evaluación y procedimientos para la certificación de los conocimientos y la experiencia de quienes ejercen una profesión con responsabilidad. Con estos procesos se han certificado profesionistas con diversos niveles de especialización.

Así, la Secretaría de Educación Pública, vigila que los procesos de certificación de profesionistas cumplan con márgenes de seguridad jurídica, imparcialidad, honestidad y equidad, a efecto de evitar conflictos de intereses y calificar la idoneidad de esos procesos que las asociaciones y colegios de profesionistas realizan, ya que la certificación profesional es una evaluación del ejercicio de una profesión y la vigilancia de su correcto desempeño, que le corresponde a la autoridad educativa federal.

En consecuencia, en ejercicio de esta atribución, la Dirección General de Profesiones ha considerado necesario invitar a las asociaciones y colegios de profesionistas que califiquen como idóneas, a que realicen la vigilancia del correcto ejercicio de la profesión y, en consecuencia, obtengan de la Secretaría de Educación Pública la calificación de idoneidad de sus procesos de certificación profesional.

Como uno de los mecanismos para calificar la idoneidad de quienes ofrecen certificación de profesionistas, con fecha 22 de julio de 2004, la autoridad educativa federal instaló el Consejo Consultivo de Certificación Profesional, integrado por las autoridades en materia de profesiones de ocho entidades federativas; las Secretarías de Economía, Salud, Trabajo y Previsión Social y Educación Pública; la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos; la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.

Con el apoyo de este Consejo, la Dirección General de Profesiones ha definido las características que deberán reunir las asociaciones y colegios de profesionistas que podrán ser considerados como idóneas para auxiliar a la Dirección General de Profesiones, en la vigilancia del ejercicio profesional en lo que se refiere al aspecto de la certificación profesional.

En este orden de ideas y con el propósito de garantizar la confiabilidad de los procesos de certificación profesional, conjuntamente con las autoridades estatales competentes, la Dirección General de Profesiones realizará la vigilancia de esta forma de ejercicio profesional, con auxilio de las asociaciones y colegios de profesionistas.

En consecuencia, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Dirección General de Profesiones, ofrece a las asociaciones y colegios de profesionistas interesados en la vigilancia del ejercicio profesional la posibilidad, mediante un proceso simplificado, transparente y abierto, de calificar la idoneidad de sus procesos de evaluación en materia de actualización de conocimientos y experiencia para la certificación de profesionistas y considerarlos como auxiliares de esta autoridad en la materia de referencia.

Como parte de estos procesos de certificación, el Código Fiscal de la Federación, establece la utilización se profesionistas con un alto conocimiento en la materia de contabilidad, lo que otorga certeza a los procesos en que participan. El artículo comentado señala lo siguiente:

Artículo 52.- Se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos afirmados: en los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes o las operaciones de enajenación de acciones que realice; en cualquier otro dictamen que tenga repercusión fiscal formulado por contador público o relación con el cumplimiento de las disposiciones fiscales; o bien en las aclaraciones que dichos contadores formulen respecto de sus dictámenes, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

I. Que el contador público que dictamine obtenga su inscripción ante las autoridades fiscales para estos efectos, en los términos del Reglamento de este Código. Este registro lo podrán obtener únicamente:

a) Las personas de nacionalidad mexicana que tengan título de contador público registrado ante la Secretaría de Educación Pública y que sean miembros de un colegio profesional reconocido por la misma Secretaría, cuando menos en los tres años previos a la presentación de la solicitud de registro correspondiente.

Las personas a que se refiere el párrafo anterior, adicionalmente **deberán contar con certificación expedida**

por los colegios profesionales o asociaciones de contadores públicos, registrados y autorizados por la Secretaría de Educación Pública y sólo serán válidas las certificaciones que le sean expedidas a los contadores públicos por los organismos certificadores que obtengan el Reconocimiento de Idoneidad que otorgue la Secretaría de Educación Pública; además, deberán contar con experiencia mínima de tres años participando en la elaboración de dictámenes fiscales.

- El subrayado es propio, y se realiza con fines ilustrativos.

De ahí que, el que se puedan integrar una íntima colaboración entre la Auditoría Superior de la Federación y los Colegios de Contadores con reconocimiento por la Secretaría de Educación Pública, para la supervisión de la práctica de integración de la cuenta pública, porque dichas agrupaciones especializadas se encuentran capacitadas para evaluar si los contadores profesionistas asociados cuentan con la capacidad y conocimientos suficientes para ejercer profesionalmente en el campo respectivo.

Esto se lograría adicionando el Art. 13 Bis a la Ley No. 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, con las modificaciones que esta comisión hace y que se propone a continuación:

Título Segundo Fiscalización de la Cuenta Pública
Capítulo Fiscalización de la Cuenta Pública

Artículo 13 Bis.- La información financiera gubernamental de las cuentas públicas que se presenten a la Auditoría Superior del Estado por parte de las entidades fiscalizables deberá ser dictaminada por profesionistas que acrediten contar con certificación expedida por los colegios profesionales o asociaciones de contadores públicos, registrados y autorizados por la Secretaría de Educación Pública; y, sólo serán válidas las certificaciones cuando sean expedidas por los organismos certificadores que obtengan el Reconocimiento de Idoneidad de la Secretaría de Educación Pública.

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero, llevará un registro de los profesionistas acreditados, y emitirá las bases y requisitos para formar parte del padrón de contadores certificados”.

Que en sesiones de fecha 04 de agosto del 2021, el Dictamen en desahogo recibió primera y dispensa de la segunda lectura, por lo que en términos de lo establecido en los artículos 262, 264 y 265 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, la Presidencia de la Mesa Directiva, habiendo sido expuestos los motivos y el contenido del Dictamen, al no existir votos particulares en el mismo y no habiéndose registrado diputados en contra en la discusión, se preguntó a la Plenaria si existían reserva de artículos, y no habiéndose registrado reserva de artículos, se sometió el dictamen en lo general y en lo particular, aprobándose el dictamen por unanimidad de votos.

Que aprobado en lo general y en lo particular el Dictamen, la Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado realizó la Declaratoria siguiente: "Esta Presidencia en términos de nuestra Ley Orgánica, tiene por aprobado el Dictamen con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 13 Bis de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero. Emítase el Decreto correspondiente y remítase a las Autoridades competentes para los efectos legales conducentes."

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 fracción I de la Constitución Política Local, 227 y 287 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, este Honorable Congreso decreta y expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 845 POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 13 BIS DE LA LEY NÚMERO 468 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE GUERRERO.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 13 Bis a la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, para quedar de la siguiente forma:

Título Segundo Fiscalización de la Cuenta Pública
Capítulo I Fiscalización de la Cuenta Pública

Artículo 13 Bis.- La información financiera gubernamental de las cuentas públicas que se presenten a la Auditoría Superior del Estado por parte de las entidades fiscalizables deberá ser dictaminada por profesionistas que acrediten contar con certificación expedida por los colegios profesionales o asociaciones de contadores públicos, registrados y autorizados por la Secretaría de Educación Pública; y, sólo serán válidas las certificaciones cuando sean expedidas por los organismos

certificadores que obtengan el Reconocimiento de Idoneidad de la Secretaría de Educación Pública.

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero, llevará un registro de los profesionistas acreditados, y emitirá las bases y requisitos para formar parte del padrón de contadores certificados.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir de la recepción de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021 que se presenta a más tardar en el mes de abril de 2022.

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase al Titular del Ejecutivo, para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

ARTÍCULO TERCERO. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, así como en la Gaceta Parlamentaria y la Página web del Congreso del Estado de Guerrero, para conocimiento general.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los cuatro días del mes de agosto del año dos mil veintiuno.

DIPUTADA PRESIDENTA.
EUNICE MONZÓN GARCÍA.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
CELESTE MORA EGUILUZ.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
SAMANTHA ARROYO SALGADO.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 90 numeral 1 y 91 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, promulgo y ordeno la publicación, para su debida observancia, del **DECRETO NÚMERO 845 POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 13 BIS DE LA LEY NÚMERO 468 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE GUERRERO**, en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los once días del mes de agosto del año dos mil veintiuno.

Secretaría
General de Gobierno

**Dirección General del
Periódico Oficial**




TARIFAS

INSERCIONES	
POR UNA PUBLICACION CADA PALABRA O CIFRA	\$ 2.40
POR DOS PUBLICACIONES CADA PALABRA O CIFRA	\$ 4.00
POR TRES PUBLICACIONES CADA PALABRA O CIFRA	\$ 5.60

SUSCRIPCIONE SEN EL INTERIOR DEL PAIS	
SEIS MESES	\$ 401.00
UN AÑO	\$ 860.43

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO	
SEIS MESES	\$ 704.35
UN AÑO	\$ 1,388.69

PRECIO DEL EJEMPLAR	
DEL DIA	\$ 18.40
ATRA SADO S	\$ 28.01



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO

DIRECTORIO

Licenciado Héctor Astudillo Flores
Gobernador Constitucional del Estado

Licenciado Florencio Salazar Adame
Secretario General de Gobierno

Licenciado Fernando Jaimes Ferrel
Subsecretario de Gobierno para Asuntos
Jurídicos y Derechos Humanos

Licenciada Daniela Guillén Valle
Directora General del Periódico Oficial
del Estado de Guerrero

Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado
Edificio Montaña 2° Piso
Boulevard René Juárez
Cisneros Núm. 62
Col. Ciudad de los Servicios
C.P. 3905

E-mail: periodicooficial@guerrero.gob.mx
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero
Telefonos: 747-13-86-084
747-13-76-311